

HILDEBRANDT

en sus trece



¡DINA es la cabecilla!

► El Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder sabe ahora, gracias a testigos protegidos, que Dina Boluarte recurrió al actual ministro del Interior para que, con los métodos que fueran necesarios, limpiara a su hermano Nicanor en la investigación sobre "Los Waykis en la Sombra". Se trataba de obstruir indagaciones, neutralizar a colaboradores eficaces y perseguir a los policías encargados de descubrir la verdad

(4, 5 y 6)

Fiscal de la Nación: "Quieren controlarlo todo"

(2 y 3)



Matices Depender de una rata

(16)



Chalecos de prensa

(24 y 25)

Sospechas en compra millonaria del PJ

(26 y 27)

Monstruos del Cusco

(28)

Cupos en el feudo de Porky

(30 y 31)

Melcochita recomienda: NO VAYAN al almuerzo contable!!!



AMÉRICO ZAMBRANO

El Fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, natural de Juliaca, concedió una extensa entrevista a este semanario para responder y hacerles frente a las amenazas y presiones del gobierno y el Congreso.

¿Son tiempos oscuros para la institucionalidad del país?

-No sé si oscuros. Quizá difíciles, complicados.

-El ministro del Interior Juan José Santiváñez declaró que la Fiscalía actúa como enemiga de la Policía y le ha pedido a usted que se vaya a su casa. ¿Qué reflexión le merecen estas críticas?

-Nosotros no tenemos enemigos. En los 34 distritos fiscales donde hemos tenido reuniones con todos los presidentes de Junta de Fiscales Superiores, les hemos preguntado si tienen algunas dificultades con la Policía, y en ninguno se ha dado esta situación. Lógicamente, en el trabajo hay omisiones, descoordinaciones menores. La Policía no es nuestra enemiga. Pero el fiscal tampoco puede ser amigo de las autoridades a las que va a investigar. El fiscal tiene que trabajar con objetividad. Y eso es lo que estamos haciendo.

¿A qué atribuye las continuas críticas hacia la Fiscalía de parte del ministro del Interior y de otros miembros de este gobierno?

-Bueno, creo que, de alguna forma, se pretende distraer, ¿no? Primero, porque es el propio gobierno el que ha dictado muchas normas, que han flexibilizado, creo, en extremo, la persecución del delito. Por un lado, el premier dice que no está de acuerdo con que se pidan prisiones preventivas. Pero, a su vez, el ministro del Interior dice que dejamos libres a delincuentes. Lo cierto es que en este régimen se han expedido muchas normas que flexibilizan e imposibilitan muchas veces que los fiscales puedan requerir prisiones preventivas.

¿Como cuáles?

-Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1585, del 22 de noviembre del 2023. Esta norma

tiene varios artículos que flexibilizan en extremo las normas y la sanción para los autores del delito, incluso de corrupción.

¿El gobierno y el Congreso se encuentran unidos en un mismo camino para socavar el trabajo que realiza el Ministerio Público?

-Claro. Funcionarios del Estado que podrían ser condenados por delitos de corrupción pueden ahora recibir perfectamente penas suspendidas. Todas estas normas se están flexibilizando. La prisión preventiva es lo que más se ha debilitado. Con esta norma, si una persona no tiene antecedentes, no se le da una prisión preventiva.

¿Cuál es el objetivo de todas estas normas?

-Habría que preguntárselo a los legisladores en algunos casos y, en otros, al Ejecutivo, que expidió decretos legislativos por delegación del Congreso. Pero el Congreso, a su vez, tiene la facultad de revisar los decretos legislativos. Y no lo hace. Y el Ejecutivo tiene la facultad de observar las leyes que aprueba el Congreso y tampoco lo hace.

-El Congreso se alista a aprobar también, la próxima semana, un nuevo proyecto de ley para que los policías, y no los fiscales, se encarguen de las investigaciones preliminares de los delitos.

-Todos sabemos, y lo hemos dicho en otros pronunciamientos, que el inciso 4 del artículo 159 de la Constitución claramente indica que es atribución del Ministerio Público conducir la investigación del delito. El policía cuando tiene conocimiento de un delito tiene la obligación de comunicarlo inmediatamente. Y el fiscal tiene que conducir esa investigación porque es el titular de la acción penal. Además, sobre él pesa la carga de la prueba. Por eso la tiene que dirigir. El efectivo policial no es el que va a una audiencia a sostener una acusación.

¿Esta norma afecta la autonomía de la Fiscalía?

-Este proyecto dice que la Policía Nacional del Perú tendrá a su cargo la investigación preliminar del delito. O sea,

"Quieren controlarlo todo"

► El Fiscal de la Nación denuncia al Congreso por estar a punto de aprobar la inconstitucional norma que pretende entregarle a la PNP las investigaciones preliminares del delito y añade que existe el deseo de vengarse de un Ministerio Público independiente que examina el caso de la presidenta y los expedientes abiertos a un buen número de parlamentarios

quieren excluir al fiscal. Luego dice: "Las investigaciones que hace el fiscal deberán hacerse por intermedio de la Policía". Pregunto: ¿de quién depende la Policía? Del Ministerio del Interior, del Ejecutivo. En

tonces van a saber qué investigaciones, qué actuaciones tenemos. No solamente eso. La misma norma establece, en otra parte, que los exámenes o pericias criminalísticas oficiales deberán ser realizadas por

la Dirección de Criminalística de la Policía Nacional. O sea, nuestros peritos no van a participar. Entonces, quieren tener las pericias, quieren dirigir la investigación preliminar, y quieren que todos los fiscales



FOTO: CESAR ZAMILLON

Juan Carlos Villena: "Vamos a seguir investigando pese a quien le pese".

actúen con intervención de la Policía para informarse de todo lo que se investiga.

-Quieren controlarlo todo.

-Ciertamente. Esta norma evidentemente es muy peligrosa.

-El fiscal coordinador de crimen organizado Jorge Chávez Cotrina asegura que el gobierno de Dina Boluarte pretende debilitar al Ministerio Público. ¿Usted también lo cree así?

-Claro, sin duda, sin duda.

-¿Todas estas normas son una consecuencia de las denuncias constitucionales que su despacho ha presentado contra la presidenta, de la investigación en marcha contra Nicanor Boluarte y de los demás casos que comprometen al gobierno y a miembros del Congreso?

-Yo creo que sí. Nosotros, como hemos dicho, somos un organismo constitucional autónomo y realizamos nuestras investigaciones con

objetividad. Cuando ha habido evidencias de indicios de delito, hemos presentado denuncias constitucionales. De diciembre a la fecha, que estoy a cargo de la Fiscalía de la Nación, hemos presentado 35 denuncias constitucionales. ¿Cuántas les han dado trámite en el Congreso de la República? No hay, no hay ningún resultado. Las investigaciones que hemos presentado contra la presidenta son porque tenemos que cumplir con nuestro deber de investigar.

-Lo que usted señala es gravísimo. Porque esto significa que el gobierno, en represalia por estas investigaciones, está utilizando todo su poder para interferir y obstruir el trabajo de la Fiscalía.

-Sin duda, sin duda. El día de ayer (miércoles 28) el juez Jorge Chávez Tamariz ha indicado (en relación a la ley 32108) que a nadie se le puede permitir aprovecharse de su propio frau-

de para librarse de un proceso. Nosotros tenemos que seguir trabajando, cumpliendo nuestras funciones constitucionales. Es lo que vamos a hacer.

-Mientras tanto, el gobierno persigue a los policías que allanaron la casa de la presidenta. Y hay audios en los que el propio ministro del Interior Juan José Santiváñez admite que recibió un supuesto encargo presidencial para desactivar a la Diviac.

-Por eso nosotros hemos iniciado investigaciones. Y en su momento seguramente van a llegar a donde corresponde. Pero el Ministerio Público tiene que seguir trabajando de acuerdo al mandato constitucional. Eso es lo que vamos a hacer. Y todos los fiscales lo estamos haciendo cada uno en el ámbito de sus funciones.

-El Eficcop señala que "Los Waykis en la Sombra" es una organización criminal que cuenta con el

soporte del gobierno.

-Pero toda la comunidad lo está observando. Toda la ciudadanía lo ve. ¿Alguien puede tener una conclusión diferente?

-¿Cuál es su conclusión?

-La investigación que iniciamos en su momento era de que esa desactivación (del Equipo Especial de la Policía en apoyo al Eficcop) tenía relación con las investigaciones que se venían realizando previamente. Y que eso constituía indicios de abuso de autoridad. Pues con esos audios (de Santiváñez) eso puede confirmarse.

-En una declaración anterior usted dijo que en febrero de este año había presentado al gobierno un pedido de nuevos recursos adicionales para el Ministerio Público. ¿Tuvo alguna respuesta?

-Nosotros hemos hecho el requerimiento presupuestario para Medicina Legal, para el personal administrativo, porque los fiscales necesitan asis-

tentes, y también para peritos. Sin embargo, no nos han dado esos recursos. Estamos prácticamente para iniciar septiembre y no hay respuesta. Nada. Hemos pedido una y otra vez reuniones con el ministro de Economía, pero simplemente no nos dan el presupuesto.

-¿Y cómo les afecta eso?

-Pero por supuesto, afecta. Necesitamos más peritos, asistentes, médicos legistas, más profesionales, más insumos. Necesitamos muchas cosas, ¿no? Pero no se asignan los recursos hasta ahora.

-El gobierno parece estar asfixiando al Ministerio Público.

-Eso es lo que están haciendo. La Diviac está trabajando eficientemente. ¿O es que antes ha sido cuestionada su labor? Todo lo contrario. Pero luego de iniciarse investigaciones, ahí sí... ahí sí.

-¿La Fiscalía está amenazada por el poder?

-Están dificultando nuestra labor. Están entorpeciendo nuestra labor constitucional. Pero nosotros vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber.

-El premier Gustavo Adrianzén también salió al frente para decir que usted no es amigo del gobierno. ¿Le molestó esta crítica?

-Mire, discrepancias, omisiones, las hay, ¿cierto? La Fiscalía de la Nación investiga a altos funcionarios. ¿Yo tengo que ser amigo de los que voy a investigar? No. Pero tampoco soy enemigo de ellos. Si ellos nos consideran así, bueno, qué se puede hacer, qué se puede hacer.

-Lo que el gobierno no parece entender es que la obstrucción a la justicia es un delito muy serio que se paga tarde o temprano.

-Efectivamente. En su momento, cada quien deberá responder por sus actos.

-¿Cuando usted asumió la Fiscalía de la Nación, en reemplazo de Patricia Benavides, se imaginó que viviría todas estas presiones?

-Bueno, yo creo que, cuando uno decide postular a ser fiscal supremo, sabe que es muy difícil que haya una gestión que sea muy tranquila. Siempre hay complicaciones, ¿no? Y el tema es que tienes que investigar. No es fácil, no es sencillo. Pero uno tiene que cumplir con esa labor porque para eso hemos asumido esta gran responsabilidad. ■

DINA es la cabecilla

► El Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder sabe ahora, gracias a testigos protegidos, que Dina Boluarte recurrió al actual ministro del Interior para que, con los métodos que fueran necesarios, limpiara a su hermano Nicanor en la investigación sobre "Los Waykis en la Sombra". Se trataba de obstruir indagaciones, neutralizar a colaboradores eficaces y perseguir a los policías encargados de descubrir la verdad

Dina Boluarte: cargándose la ley y el debido proceso con tal de auxiliar a su cómplice hermano.

AMÉRICO ZAMBRANO

Un testigo protegido declaró ante el Ministerio Público que la presidenta Dina Boluarte nombró al abogado Juan José Santiváñez como ministro del Interior para que, desde esta posición de poder, supervise y coordine la defensa de su hermano, Nicanor Boluarte, obstruya las investigaciones, neutralice a colaboradores eficaces y persiga a los policías que apoyan al Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

El plan empezó a gestarse el 7 de abril de 2024, una semana después del allanamiento a la vivienda de Boluarte por el llamado "caso Rolex".



FOTO: JONEL DUTÁN

Según la declaración del testigo protegido TP-11-2024, que obra en la carpeta fiscal N° 11-2023, el entonces ministro del Interior Walter Ortiz

Acosta le ofreció a Santiváñez el cargo de jefe del gabinete de asesores de su despacho con la condición de que asesore y coordine la defensa del herma-

no de la mandataria, Nicanor Boluarte, quien es investigado por el caso denominado "Los Waykis en la Sombra". "(Santiváñez) aceptó, pues

su verdadera intención era congraciarse con la presidenta Dina Boluarte para conseguir ser designado como ministro del Interior", relató el testigo



Nicanor: el segundo de a bordo en una organización dedicada al tráfico de influencias y a los nombramientos destinados a crear el partido propio.

protegido. "Es por eso que, el 7 de abril de 2024, el entonces ministro del Interior suscribió la resolución ministerial que designó como jefe del gabinete de asesores del ministerio del Interior a Juan José Santiváñez Antúnez", declaró.

Dos días después, el 9 de abril, Santiváñez se reunió en la sede del Ministerio del Interior con el abogado Luis Vivanco Gotelli, quien era su amigo y con quien había trabajado en casos anteriores. De acuerdo con el Eficcop, en dicho encuentro, que duró desde las 7:57 a.m. hasta la 1:16 p.m., el hoy ministro del Interior le pidió a Vivanco ayuda para organizar la defensa del investigado hermano de la presidenta.

Ese mismo día Santiváñez fue informado de que el

Eficcop había recibido la declaración de un testigo clave: Raúl Oliva Guerrero, jefe de la Dirección de Autoridades Políticas, un organismo dependiente del Ministerio del Interior. Oliva ofreció detalles importantes sobre la intervención de Nicanor Boluarte en la designación a dedo del investigado Noriel Chingay como prefecto regional de Cajamarca.

Debido a esta razón, Luis Vivanco Gotelli, acompañado del también abogado Harold Saavedra Zúñiga, volvió esa misma tarde al Ministerio del Interior para reunirse con Santiváñez. La cita duró desde las 7:23 p.m. hasta las 9:01 p.m., según el registro de visitas de dicha cartera.

El testigo protegido TP-11-2024 manifestó al Eficcop

que Santiváñez no solo fungió de abogado en la sombra de Nicanor Boluarte sino que también propició acciones para que la Inspectoría General de la Policía resolviera suspender temporalmente al coronel Harvey Colchado, líder del equipo policial que allanó por la fuerza la casa de la presidenta, de la jefatura de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac). Colchado fue apartado de su cargo por supuestas infracciones graves y muy graves el 13 de abril pasado.

Cuatro días después Boluarte premió a Santiváñez con el cargo de flamante viceministro de Orden Interno. "En retribución de haber ayudado a conseguir el objetivo de destituir al coronel PNP Harvey Colchado de la coor-

dinación del Equipo Especial PNP en apoyo al Eficcop, la presidenta Dina Boluarte, el 17 de abril del 2024, suscribió la resolución suprema que designó como viceministro de Orden Interno a Juan José Santiváñez Antúnez", declaró el testigo protegido a la Fiscalía. "Y es a partir de ese momento que Santiváñez se convierte también en el jefe inmediato de Jorge Luis Ortiz Marreros, director general de Gobierno Interno y principal coinvestigado de Nicanor Boluarte en el caso 'Los Waykis en la Sombra'", reveló.

Desde entonces, como viceministro del Interior, Santiváñez tuvo más poder para obstaculizar la investigación seguida contra el hermano de la jefa de Estado, según las investigaciones del Eficcop. El abogado Luis Vivanco Gotelli acudió al Ministerio del Interior para reunirse nuevamente con Santiváñez el 19 de abril, entre las 7:53 p.m. y las 9:00 p.m., y el 30 de abril, entre las 10:34 y las 11:08 de la mañana.

Vivanco debía continuar coordinando con Santiváñez la estrategia de defensa de Nicanor Boluarte. Sin embargo, había que justificar su presencia continua en el Ministerio del Interior. Por este motivo, a Santiváñez se le ocurrió invitar a una serie de abogados para discutir el tema de la lucha contra la criminalidad organizada transnacional en una única reunión de trabajo. Fue solo una excusa para acreditar las visitas de Luis Vivanco Gotelli a dicha cartera, según el testigo.

"Tengo conocimiento de que a esta reunión acudieron los abogados Francisco Álvarez, Percy García, José Antonio Caro y Ricardo Elías, reunión que fue por única vez y no se volvió a dar", relató el testigo protegido TP-11-2024. "Sin embargo, ante los medios de comunicación, el ministro Santiváñez, cuando le preguntaron por las reuniones que había tenido con Vivanco Gotelli, mencionó que se trataban de reuniones de trabajo para tratar el tema de terrorismo urbano transnacional (...) pero todo eso es mentira porque, como lo mencioné, solo se reunieron una sola vez para tratar ese tema", dijo.

En total, entre el 9 de abril y el 8 de mayo de este año, Santiváñez y Vivanco se reunieron por lo menos cinco veces en las oficinas del Ministerio del

Interior para coordinar acciones relacionadas a la defensa técnica del hermano de la presidenta.

El 10 de mayo el Eficcop, junto a personal de la Diviac, ejecutó una orden judicial de detención preliminar contra Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, quien en ese momento era el abogado de la presidenta, y otros investigados relacionados al caso "Los Waykis en la Sombra".

Santiváñez, quien ya estaba al tanto de la detención del hermano de la presidenta, solicitó una reunión inmediata con el abogado Luis Vivanco Gotelli. "(Santiváñez) se comunicó con el abogado Luis Vivanco Gotelli y le pidió que concurra a las instalaciones del Ministerio del Interior para que se reúnan y coordinen específicamente la defensa técnica de Nicanor Boluarte Zagarra", narró el testigo protegido. "Es en este encuentro donde el entonces viceministro de Orden Interno Juan José Santiváñez Antúnez le indicó a Luis Vivanco Gotelli que, por orden de la presidenta de la República, iba a asumir la defensa técnica de su hermano Nicanor Boluarte. Pero, como su cargo de confianza le impedía ejercer una defensa activa, le pidió a Vivanco que sea él quien se apersona como abogado del hermano de la presidenta y que esté presente en las diligencias que se realicen durante los días de detención, lo cual fue aceptado por el abogado Luis Vivanco", afirmó.

Al día siguiente, el pasado 11 de mayo, a la 01:37 horas, el abogado Luis Vivanco envió un documento a la dirección electrónica del Equipo 5 del Eficcop (mesadepartes.eficcop.equipo5@mpfn.gob.pe), en el que se acreditó como abogado de Nicanor Boluarte. Vivanco envió este apersonamiento desde el correo estudiovivancoabogados@gmail.com.

El testigo protegido TP-11-2024 también reveló otro hecho grave al Eficcop: según su declaración, Santiváñez, supuestamente por orden de la presidenta Dina Boluarte, hizo todo lo que estuvo a su alcance para proteger al director general de Gobierno Interior, Jorge Luis Ortiz Marreros, quien se encontraba prófugo de la justicia por sus nexos con Nicanor Boluarte y la organización criminal "Los Waykis en la Sombra".



Boluarte agradece a Santiváñez, su oscuro ministro, por todo lo hecho. Fue el miércoles último.



Harvey Colchado: su expulsión era imprescindible en la operación encubrimiento.



Jorge Luis Ortiz Marreros: se entregó a la Policía cuando Santiváñez le prometió impunidad.

El temor del gobierno era que Ortiz Marreros, quien designó a los subprefectos regionales, provinciales y distritales, así como a los prefectos regionales por órdenes de Nicanor Boluarte, fuese capturado, se acogiera a la colaboración eficaz y delatara al hermano de la presidenta. "Entonces, para evitar toda esa situación que pondría en evidencia todo el actuar ilícito de la organización criminal liderada por Nicanor Boluar-

te, el entonces viceministro de Orden Interno, Juan José Santiváñez, aprovechándose de su cargo, al ser jefe directo de Jorge Luis Ortiz Marreros, se comunicó con este, en circunstancias que se encontraba como no habido, y le indicó que él se haría cargo de su defensa técnica, condicionándolo a que no delate a Nicanor Boluarte, lo cual fue aceptado por Ortiz Marreros", manifestó el testigo protegido al Eficcop. Luego de esto,

según la versión del testigo, Santiváñez le habría indicado al prófugo Ortiz Marreros "que tenía que desaparecer el equipo celular que utilizaba porque tenía información que perjudicaría a Nicanor Boluarte y a él mismo, por lo que Ortiz Marreros extrajo la tarjeta SIM de su equipo celular y seguidamente habría ocultado el celular. Pero para continuar en comunicación con Santiváñez, Ortiz Marreros colocó la tarjeta SIM en otro celular".

La mañana del 11 de mayo pasado Santiváñez se comunicó con su sobrino, el abogado Carlos Alvizuri Marin, para pedirle que asuma la defensa de Ortiz Marreros, a lo que el letrado aceptó, según el testigo.

Lo que ocurrió después parece sacado del guion de "El Padrino". "Ese mismo día (Santiváñez) recibió información por parte de la Dirección de Contrainteligencia de la DIGIMIN, la cual consistía

en que personal de la Diviac estaba por ubicar y capturar a Jorge Ortiz Marreros y, como ello representaba un peligro, ya que podía iniciarse un proceso especial de colaboración eficaz con este investigado, Santiváñez se comunicó con su sobrino Carlos Alvizuri y le indicó que era necesario convencer a Jorge Ortiz para que se presente en las instalaciones de la Diviac y se ponga a disposición del Eficcop, porque la Diviac estaba por ubicarlo y detenerlo", relató el testigo protegido TP-11-2024.

El abogado Carlos Alvizuri llamó a Ortiz Marreros y le indicó que debía entregarse a la Policía, según el Eficcop. Luego de ello, Santiváñez se comunicó con el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como "Culebra", y le señaló que Ortiz Marreros se había contactado con él para informarle que se presentaría con su abogado en la Prefectura. "Culebra" dio cuenta de ello al personal de la Diviac.

Esa misma noche Ortiz Marreros se presentó con su abogado, Carlos Alvizuri, el sobrino de Santiváñez, en las instalaciones de la Diviac, situadas dentro del local de la Prefectura, en el centro de Lima, donde fue detenido de manera preliminar. Ortiz Marreros no se acogió a la colaboración eficaz. Según declaraciones de su abogado Carlos Alvizuri, continúa trabajando como analista 3 del Ministerio del Interior.

Apenas cinco días después, el 16 de mayo pasado, la presidenta Dina Boluarte aceptó la renuncia del ministro del Interior Walter Ortiz Acosta y designó en su reemplazo al íntimo abogado Juan José Santiváñez.

Desde su juramentación, Santiváñez ha continuado desplegando diversas conductas contrarias a la ley, utilizando para ello el poder que le confiere su cargo, para encubrir al hermano de la presidenta, obstaculizar las investigaciones del Ministerio Público y perseguir a los policías que trabajan en conjunto con el Eficcop, según la Fiscalía. Santiváñez, sin embargo, no podría actuar sin el respaldo y el consentimiento de la mandataria. En los hechos, según la tesis del Eficcop, quien está a la cabeza de la presunta organización criminal "Los Waykis en la Sombra" no es otra que la presidenta Dina Boluarte. ■

TC a su servicio

► Keiko Fujimori pasará un formidable fin de año: el Tribunal Constitucional que es parte de la coalición gubernamental se prepara para aliviarla (también) del cargo de integrar una organización criminal

BRUNO AMORETTI

Keiko Fujimori ha resultado toda una maestra de aikido, el arte marcial que utiliza la fuerza del oponente para abatirlo. Con una torcedura de codo, la heredera del fujimorato se ha librado de la acusación por obstrucción a la justicia, propinándole un golpe certero al Equipo Especial Lava Jato. La siguiente llave será una torcedura de muñeca para eludir la acusación por crimen organizado.

La sentencia del TC que excluyó al abogado Arsenio Oré del caso "Cócteles" fue el inicio de la estrategia. La victoria amañada en el Constitucional gatilló que otros 15 implicados en el juicio oral, incluyendo a la "señora K", queden libres de la acusación por obstrucción a la justicia.

El proceso deberá volver a fojas cero.

El fallo del TC tuvo seis votos a favor. El magistrado Manuel Monteagudo fue el único que votó en contra del pedido de Oré. Sus colegas argumentaron que el fiscal José Domingo Pérez no podía ser "investigador y víctima" de un mismo caso.

Para Monteagudo, igual que para buena parte de los constitucionalistas decentes, el agravado es el Estado y no Pérez. Este fue el mismo argumento que avalaron los magistrados de dos instancias constitucionales del Poder Judicial que no le dieron la razón a Arsenio Oré. Por eso para Keiko Fujimori hacerse con el Tribunal Constitucional a su medida para que hiciera una reinterpretación auténtica del delito de "obstrucción a la justicia" resultaba imperioso.

Pedro Grández, constitucionalista y docente de la Pontificia Universidad Católica, sostiene que no existe una norma que obligue a un fiscal a no investigar un nuevo delito relacionado directamente con



Keiko Fujimori y Giuliana Loza: están felices aunque a veces lo disimulan.

el caso que investiga.

"Los fiscales investigan hechos que pueden conocer circunstancialmente y eso no los desautoriza. Ellos no son jueces que juzgan el caso, su tarea es perseguir el delito sin importar cómo lo conozcan. La objetividad que se les exige no tiene que ver con cómo se enteran sino que se trata de que sean rigurosos al investigar", afirma el especialista.

El Tribunal Constitucional cocina otro fallo para darle la estocada final al proceso contra Keiko Fujimori y la cúpula de su organización. El golpe final ocurriría antes de terminar el año.

Se trata de un hábeas corpus presentado por José Chlimper Ackerman, exsecretario general de Fuerza Popular, quien ha enfilado su artillería contra José Domingo Pérez y el juez Víctor Zúñiga. La defensa pide apartar al fiscal y al juez de la investigación preparatoria y anular de plano la acusación de la Fiscalía para que se "reformule".

El abogado del exhombre de confianza de Keiko —el que

trajinaba con los maletines con dinero negro— alega que se vulneró el derecho a su defensa porque cuando se presentó la acusación en su contra luego de seis años la Fiscalía añadió "36 nuevos hechos" sin notificarle. La responsabilidad del juez Zúñiga, según el abogado, habría sido permitir esas supuestas "omisiones" de la Fiscalía.

Luego del remezón provocado por la sentencia en favor de Arsenio Oré, fuentes en el TC afirman que la votación del pedido de Chlimper ha entrado a la congeladora por algunos meses "para no generar tanto escándalo". Algunos magistrados consideran que el caso de Chlimper es incluso más "claro y evidente" que el de Oré.

Desde el equipo del fiscal Pérez alertan que los "nuevos hechos" son en realidad "precisiones" y no cuestiones de fondo de la investigación.

La Fiscalía también está al tanto de un segundo hábeas corpus presentado el 17 de julio por la defensa de Chlimper contra el juez Víctor Zúñiga. El

pedido es el mismo: anular la acusación y empezar de nuevo.

En el Congreso el fujimorismo y sus satélites recientemente pasaron por un tubo la nueva ley que debilita la figura del crimen organizado. La mentada norma es un regalo con moño incluido a todas las bandas dedicadas al cohecho, la colusión, las estafas y otros 56 tipos penales.

A partir de ahora, y con la anuencia de la inquilina de Palacio de Gobierno, estos delitos no serán considerados para procesar a las organizaciones criminales.

"Esta nueva norma establece que las organizaciones criminales deben tener sólo una finalidad económica. Este aspecto debilita el caso 'Cócteles', porque la acusación del fiscal Pérez se centra sobre todo en que Fuerza Popular tenía como objetivo tomar el poder político", afirma el abogado penalista Andy Carrión.

La banda de la "chica" ya está preparando una batería de escritos que terminarán tarde o temprano en el TC para

patear de nuevo el tablero. La victoria del segundo round es inminente.

Para el penalista Carlos Caro modificar las reglas del delito de organización criminal en pleno juicio impide su buen desarrollo. "Esta norma fue hecha entre gallos y medianoche y sin tecnicismos. La nueva ley —continúa el especialista— debería aclarar algunos términos que ya existían, pero no añadir nuevas exigencias que debiliten el proceso en curso".

"Lo importante es la norma en sí, no quién la patrocina", dice uno de los magistrados del TC a esta publicación consultado por la flamante norma del Congreso.

"Si tú quitas el delito de organización criminal de la acusación, ya es más difícil sostener el resto de los cargos", señala Elí Vidal, abogado penalista del estudio Azabache Caracciolo.

"Cuando el TC emite un precedente, debería preguntarse qué valores están en juego y a quiénes beneficia este tipo de decisiones. En el contexto político actual se está usando este caso 'Cócteles' con una clara proyección política", señala el constitucionalista Pedro Grández.

Fuentes cercanas al fiscal Pérez afirman que la estrategia de la defensa de Fujimori y compañía será imitar lo que ocurrió en Brasil con el actual presidente Lula da Silva.

En el 2021 el Tribunal Supremo Federal concluyó que el exjefe Sergio Moro, a raíz de unos audios y textos con los fiscales brasileños del caso Lava Jato, no fue imparcial al condenar al mandatario y enviarlo a prisión. La decisión judicial terminó por allanar el camino a Lula hacia el sillón presidencial el 2022. "En el caso 'Cócteles' no hay chats ni audios, pero sí hay una 'víctima' parcializada: el fiscal Pérez", señala una fuente del Ministerio Público.

En las últimas semanas la Sala del juicio oral, presidida por la jueza Juana Caballero García, ha reducido la frecuencia de las audiencias. Inicialmente estableció que iban a ser dos audiencias por semana con ocho horas por sesión. Ahora se ha limitado a la cuarta parte: sólo los lunes por casi cuatro horas. Se trata de que nada se mueva hasta que los empleados del Tribunal Constitucional entierran el expediente y brinden con un cóctel la salvación judicial de su patrocinadora. ■

Terror en la ruta

► La experiencia de "El Chino" es el botón de muestra de una actividad criminal que aspira a recaudar un porcentaje de lo que produzcan los 22,107 vehículos de las 336 empresas de transporte acreditadas en Lima y Callao

SHANNA TACO

Los conductores de "El Chino" viven sometidos a la ley del terror. La ruta de buses que recorre Lima de Villa El Salvador a Puente Piedra ha sufrido cuatro atentados en las últimas semanas. Son las mafias del crimen organizado que exigen a sus dueños que paguen cupos. Pese a la virulencia de los ataques, con balazos incluidos, la Policía se ha limitado a destacar a tres agentes recién licenciados a modo de vigilantes en una terminal de la compañía.

Las amenazas contra los conductores de la Empresa de Transporte Urbano Los Chinos S.A. (Etuchisa) empezaron el último jueves 15 de agosto. Ese día, alrededor de las 5 de la tarde, un chofer, a quien llamaremos Aldo, conducía por la avenida César Vallejo en Villa El Salvador cuando lo agredieron.

"Subió un venezolano y me mentó la madre. Me dijo: 'ustedes son tercetos para seguir trabajando sin pagar'. Se puso malcriado y como vi que no estaba armado, le di un codazo y se bajó del carro. Los pasajeros se asustaron", cuenta Aldo.

Los siguientes cuatro ataques contra los choferes fueron a punta de pistola. Aldo decidió dejar la empresa en la que había trabajado más de dos años.

Los cuatro dueños de Etuchisa, encabezados por su gerente Juan José Floríndez, han optado por guardar silencio. El miedo a represalias los ha enmudecido.

El viernes 16 de agosto, en horas de la madrugada, una de las unidades de Etuchisa fue blanco de dos balazos mientras circulaba con pasajeros

por el Parque Chillón (Puente Piedra). En el chat grupal de los conductores hay una serie de mensajes que sirven para describir la tensión que se vive en el asfalto.

"Compañeros, hoy a las cinco de la mañana le han metido bala a este 'chino' para extorsionarnos [...] le han bajado la llanta y ahí están las balas tiradas en el piso", narró un conductor en un video.

Un testigo del hecho cuenta que una moto con dos personas a bordo se estacionó junto al conductor y le apuntaron con un arma. Luego de insultar al chofer, empezaron los disparos al bus. Antes de retirarse los delincuentes advirtieron que el mensaje era para los dueños de la empresa.

"A ver pronúnciese, estamos hablando de nuestras vidas", "Cuando la empresa no les hace caso, matan al conductor", "Tengan cuidado, compañeros, hace una semana a mí me pareció raro que dos motos me estén chalequeando desde Villa El Salvador", "La empresa está esperando que nos pase algo para manifestarse", "Si una de las balas le cae al pasajero, ¿quién asume el costo posterior?", dicen algunos de los comentarios de los conductores.

La respuesta los desalentó. Los administradores borraron varios de los mensajes de los choferes sin atender ni ofrecer asistencia de algún tipo.

Continuaron laborando hasta el día 20 de agosto, cuando la banda extorsiva perpetró el segundo ataque armado.

"Los Chinos" tienen dos paraderos finales: uno en el kilómetro 34 de la avenida Lima (Villa El Salvador) y el segundo en la urbanización Ensenada (Puente Piedra). El pasado martes 20 de agosto el

Los conductores de "Los Chinos" han sido blanco de una serie de intimidaciones y cuatro atentados armados en las dos últimas semanas. "Las amenazas son para los dueños, pero nosotros como conductores somos los que sufrimos las consecuencias", dice uno de ellos anónimamente.



"Estamos exponiendo no solo nuestras vidas..."

"¿Y si reventaba la bala un parabrisas o una ventana?"

paradero Ensenada fue el escenario de la segunda balacera.

El vigilante del terminal recuerda que eran las siete de la noche cuando llegó uno de los buses. Mientras el conductor pasaba por el frontis del terminal empezó el ataque. Dos sujetos dispararon seis balas contra la carrocería y las llantas del bus.

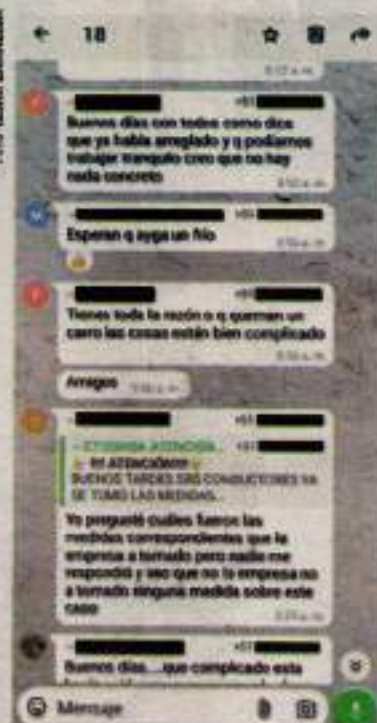
"Afortunadamente ya no había ningún pasajero, pero el conductor pudo haber terminado con una bala. Luego de disparar, los dos delincuentes se fueron corriendo", recuerda el vigilante. Al día siguiente los choferes decidieron no sentarse más al volante.

El día 22 de agosto la Autoridad de Transporte Urbano

(ATU) organizó una reunión con jefes de la Policía Nacional y representantes del gremio de transportistas. En la cita participaron el general Marco Conde, director de investigación criminal de la Policía Nacional, y el coronel Jorge Carpio, jefe de la Unidad de Extorsiones. En el cónclave se acordó "reforzar la seguridad en los servicios de



FOTO: CÉSAR ZAMALIDA



"Veo que la empresa no ha tomado ninguna medida..."



"No les importa lo que nos pueda pasar..."



"Esto se está saliendo de control..."

señaló el testimonio.

Los directivos de Etuchisa les pidieron a los choferes que continúen trabajando "con total normalidad y tranquilidad".

"Nosotros no trabajamos en planilla ni tenemos seguro. Si nos llega a suceder algo,

guen un reemplazo y listo. Ese par de policías custodiando es pura pantalla, ni siquiera han venido a preguntarnos para investigar. Mientras conducimos estamos totalmente desprotegidos, en las zonas más peligrosas no hay poli-



El día 22 de agosto la ATU organizó una reunión con jefes de la Policía Nacional y representantes del gremio de transportistas. Lo único que salió bien de aquella cita fue la fotografía para las redes sociales pues cuatro días después ocurrieron dos nuevos atentados armados.



FOTO: JOEL DUBÁN

David Mujica, abogado especialista en transporte: "Los conductores y las empresas siguen pagando cupos porque no hay resultados por parte de la policía".

transporte público". Lo único que salió bien de aquel encuentro fue la fotografía para las redes sociales.

El "refuerzo" consistió en enviar tres policías recién salidos de la academia al paradero que la compañía tiene en Puente Piedra. Algunos conductores se animaron a retomar sus actividades, pero apenas cuatro días después ocurrió el tercer ataque armado.

La noche del día lunes 26 el conductor de una de las unidades envió un audio al chat grupal.

"Compañeros, buenas noches, hoy cuando estaba pasan-

do por la avenida Villasel hubo un atentado. Al carro le dieron dos balazos y la bala pasó por (el) medio de la luna. Menos mal que no le llegó a ningún pasajero. Tengan cuidado, compañeros, yo mañana no salgo, están críticas las cosas", señaló el chofer.

Al día siguiente, martes 26, otra agresión. La víctima lo reportó al grupo de WhatsApp.

"Se subieron cinco venezolanos a mi unidad -narró el conductor-. Tenían un galón de gasolina, me lo han vaciado un poquito a mi lado y me dijeron que si me veían nuevamente, me prendían el carro",

nadie responde. La empresa también toma represalias con nosotros, en el grupo de WhatsApp bloquean o eliminan a los compañeros que hablan de las amenazas, lo único que dicen los dueños es: 'si les pasa algo, los vamos a apoyar en su recuperación'. El mensaje para nosotros es que no trabajemos hasta que paguen el cupo. Las amenazas son para los dueños, pero nosotros como conductores somos los que sufrimos las consecuencias", dice un chofer de la compañía.

"Si mañana matan a un compañero, a la empresa no le va a importar, te consi-

das", comenta otro chofer.

El miércoles 28 de agosto ocurrió otro ataque de los extorsionadores. Cerca de la una de la tarde los delincuentes lanzaron un sobre manila en las instalaciones del terminal de Etuchisa, en Villa El Salvador. Dentro del sobre había una granada que fue inutilizada por los efectivos de la Unidad de Desactivación de Explosivos. Los conductores decidieron suspender la circulación.

ABANDONO

Luis Maraví, vicepresidente de la Coordinadora

de empresas de transporte, señaló que existe poco apoyo por parte de la Dirección de Investigación Criminal de la PNP.

"Yo denuncié el año pasado -detalla Maraví- porque los extorsionadores me estaban pidiendo una mensualidad de 5 mil soles. En la Dirincrí me dijeron que tenía que pagar para que se concrete el delito de extorsión, yo les di mi teléfono para que ellos coordinen y los rastreen, pero pasaron los meses y me dijeron que por falta de pruebas no se podía continuar la investigación".

El vicepresidente de este gremio de transportistas confirma además que, ante el abandono, la mayoría de conductores realizan el pago de cupos. Cada chofer abona un sol cada vez que pasa por el punto de "peaje" de los extorsionadores. Al día pagan 8 soles. Cobrándoles a 100 buses, los extorsionadores pueden ganar S/ 800 diarios y S/ 24,000 mensuales.

"Las autoridades los han dejado avanzar y ahora hablamos de redes criminales. Tienen su propio sistema de inteligencia y saben por dónde te mueves. Los conductores y empresas siguen pagando cupos porque no hay resultados por parte de la policía", señala David Mujica, abogado especialista en temas de transporte.

A la fecha en Lima y Callao hay registradas 336 empresas de transporte que tienen en circulación 22,107 vehículos. Se trata de un potencial negocio millonario para el crimen organizado. ■



"No quedaban más que pedazos de las víctimas. Arriba, en las aulas, las familias recogían kilos y kilos de pedazos de cuerpos en bolsas, sin saber quiénes eran", narró el periodista al-Sharif.

Muchos miles de muertes más

► La cifra oficial de víctimas letales del genocidio en Gaza bordea las 40,000. Pero todo indica que se trata de una cuantiosa subestimación

ELIA Y. DIZ

"Hablé con una mujer mientras su hija de tres años, con las piernas destrozadas, se recuperaba en el hospital. Un soldado había disparado a la niña luego de ejecutar al hermano de la menor con un tiro en la cabeza", contó la periodista y escritora Susan Abulhawa desde El Cairo el pasado 6 de marzo. El medio estadounidense "Democracy Now" publicó su testimonio con olor a muerte. Abulhawa acababa de regresar de Gaza, donde estuvo dos semanas.

La madre de los dos niños narró a la periodista cómo el soldado "se había divertido" con sus hijos. Le contó que an-

Muhammad Shadi Al-Quarra, un niño huérfano de 4 años, con cáncer, no ha recibido tratamiento debido al bloqueo israelí a los medicamentos. (Foto: "Al Jazeera").



tes de ejecutar al niño estuvo durante 30 minutos disparándole a los pequeños, apostado en un tanque y errando adrede hasta que al final se aburrió y mató al varón de un tiro en el cráneo y luego mutiló a la niña con la precisión de un francotirador veterano.

Hace poco menos de dos semanas el Ministerio de Salud de Gaza anunció que, desde el 7 de octubre del 2023, cuando Israel comenzó los ataques en la Franja, han muerto 40,000 gazatíes. Pero la cifra subestima por miles de cadáveres la mortandad en la región. Este



Hace dos meses la periodista Susan Abulhawa (56) publicó un artículo en la revista de Chicago "The Electronic Intifada" en el que sustenta que el asedio de Israel ha dejado por lo menos 194,768 gazatíes muertos. "The Lancet", la revista científica británica, avaló sus cálculos.

recuento sólo incluye los cuerpos que han sido enterrados oficialmente. Quedan fuera los que siguen debajo de los escombros, los pulverizados en las explosiones y las víctimas colaterales: aquellos gazatíes que mueren de hambre o por falta de medicamentos para tratar infecciones, cáncer o males congénitos, por ejemplo.

Hace dos meses la periodista Susan Abulhawa publicó un artículo en la revista de Chicago "The Electronic Intifada" en el que sustenta que el asedio de Israel ha dejado por lo menos 194,768 gazatíes muertos. "The Lancet", la revista científica británica, no sólo avala los cálculos de Abulhawa sino que sus científicos añadieron algunos cadáveres más.

Rasha Khatib, Martin McKee y Salim Yusuf, los investigadores de "The Lancet", consideran que es plausible que los palestinos muertos por bombas israelíes lleguen al medio millón.

El colegio Al-Tabin del barrio Daraj, en la zona este de Gaza, asilaba a 2,400 palestinos desplazados cuando Israel lo puso en la lista de sus objetivos a destruir.

En la mañana del pasado 10 de agosto, mientras los hombres rezaban en el patio y las mujeres y niños se alistaban en las aulas para una nueva jornada como refugiados, dos misiles made in USA asolaron la escuela.

"Dentro de la mezquita había pilas de cuerpos, extremida-

des desmembradas esparcidas por todas partes. Los pocos que habían sobrevivido el impacto salían corriendo envueltos en fuego", describió la superviviente Suzan al-Basyouni al medio de comunicación catari "Al Jazeera". La mujer resultó ser una afortunada porque entre los pedazos de cuerpos mutilados, pudo reconocer los restos de su marido.

"La mayoría de las familias todavía no han encontrado a sus seres queridos", explicó el corresponsal de "Al Jazeera" y testigo de la masacre Anas al-Sharif.

"No quedaban más que pedazos de las víctimas. Arriba, en las aulas, las familias recogían kilos y kilos de pedazos de cuerpos en bolsas, sin saber quiénes eran", narró el periodista.

"Fui a buscar a mi hijo cuando me dijeron que había sido bombardeado mientras rezaba.



Al llegar, cuando pregunté por él, me dieron una bolsa con 23 kilos de carne dentro. 'Entiérzalo, es tu hijo', me dijeron (...). ¿Cómo voy a saber si era él?", contó el padre de Abu Saleh, un menor de edad asesinado ese día.

Tayseer al-Tanna, cirujano cardiovascular del hospital al-Ahli Arab, estaba trabajando el 10 de agosto cuando llegaron los sobrevivientes de la masacre. "Nunca había visto quemaduras así, que cubriesen el 70% o 90% del cuerpo de las víctimas (...). La mayoría murieron en cirugía", dijo a "Al Jazeera".

En su investigación, Susan Abulhawa explica que el Ministerio de Salud palestino no tiene ni siquiera la capacidad para hacer un recuento fiable del número de personas que fallecen en los hospitales que

aún funcionan en Gaza. El resultado es, inevitablemente, la subestimación de víctimas mortales. Por ejemplo, en el colegio Al-Tabin sólo se pudo registrar un centenar de muertos. Los cuerpos que no pudieron ser reconocidos oficialmente siguen vivos.

A las víctimas directas de la metralla —explica la periodista Susan Abulhawa— hay que sumarles las indirectas, que no serían menos de 95 mil palestinos.

Inshirah Saeed al-Madani, una niña refugiada en el campo de al-Nuseirat, no ha podido recibir tratamiento para el cáncer que la consume desde el pasado 7 de octubre. Perdió un ojo debido a los tumores que le crecen en la cara y que amenazan con matarla. Muhammad Shadi Al-Quarra, un niño huérfano de 4 años, también con cáncer, no ha recibido tratamiento debido al bloqueo israelí a los medicamentos.

En caso de fallecer, ninguno de los dos menores aparecería en los reportes del Ministerio de Salud como víctimas del asedio israelí. Es el caso de Yazan Kafameh (10), que murió el 4 de marzo en un hospital de Rafah víctima de la desnutrición.

Abulhawa calcula que, como mínimo, 17 mil gazatíes han fallecido por falta de medicamentos y otros 24,750, como Yazan, murieron de inanición.

"Debido a la destrucción de la infraestructura de agua y saneamiento, junto con las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, el asedio de Israel ha provocado la propagación de enfermedades contagiosas y transmitidas por el agua, como ictericia aguda, diarrea aguda (con heces sanguinolentas), sarna y piojos, erupciones cutáneas, varicela e infecciones respiratorias agudas, que sumaban 1'440,805 casos hasta el 10 de junio", explicó Abulhawa.

"Si sólo el 1% de estos pacientes sucumbió ante estas condiciones, un adicional de 14,408 personas han sido asesinadas indirectamente por el bombardeo y la toma de Gaza", describió en el artículo, publicado antes de que empezase la epidemia de polio en la Franja. El pasado 27 de agosto se confirmó oficialmente el primer caso. La enfermedad le fue diagnosticada a Abdel-Rahman Abu El-Jedian, un bebé de 10 meses.

"No hay medicación. No hay cómo tratar la polio en Gaza.

Me desplazaron del sur al norte y del norte al sur, y no encontré vacunas para mi hijo. Ahora no puedo darle ni suplementos mientras nos refugiamos acá, en esta carpa —dijo a "Al Jazeera" la madre del niño, Nevine Abu El-Jedian—. Había aprendido a moverse, gatear y caminar rápido. Sus dientes le habían crecido pronto. Y de repente, no puede moverse, no puede sentarse. Está paralizado".

En los estudios publicados por "The Lancet" y "The Electronic Intifada" se calcula que hay más de 42,000 gazatíes enterrados bajo los escombros. Estos tampoco están en los reportes del Ministerio de Salud. Y difícilmente estarán en los próximos.

"El equipo que utilizamos es muy anticuado y la Defensa Civil no ha recibido ningún equipo nuevo desde 2006", denunció en diciembre el capitán Raed Saqr, del Departamento de Bomberos y Rescate de la Defensa Civil de Ciudad de Gaza, a Mohammad Abu Shamma, corresponsal de "Al Jazeera".

Las herramientas del equipo están limitadas a palas para retirar escombros, mazos para romper hormigón, serruchos manuales para cortar metal y palancas. El rescate de los sobrevivientes enterrados bajo las ruinas de las ciudades es virtualmente imposible.

"Además nuestros equipos han sido atacados mientras buscábamos a personas bajo los escombros, para obligarnos a evacuar la zona", explicó Anes Wafi, capitán de Bomberos y Rescate de Khan Younis.

"Muchos de nuestros amigos y seres queridos quedaron enterrados vivos bajo los escombros", denunció en marzo Mohammed Hamouda, un trabajador sanitario desplazado en Rafah. "Algunos de ellos ya han muerto y otros están esperando morir", dijo a los corresponsales del medio estadounidense CNN.

Sumando cadáveres, dicen los expertos de "The Lancet", hoy viernes 30 de agosto el número de palestinos muertos en Gaza no bajaría de 244,879.

"Estas cifras finales no incluyen a los miles de secuestrados que están siendo torturados en gulags israelíes, de los cuales se ha confirmado tres docenas de víctimas mortales de torturas y maltratos", acotó la periodista en los párrafos finales. Y la matanza continúa. ■

Solidario

Señor

César Hildebrandt

Director

Semanario

"Hildebrandt en sus trece"

El suscrito es un viejo periodista radicado en el Cusco y me dirijo a su persona y por su intermedio a todo el equipo de periodistas redactores, equipo técnico, ilustradores, caricaturistas y administrativos para expresarles mi saludo afectuoso desde la Capital Histórica del Perú.

El motivo de la presente es para pedirles que sigan en el empeño de persistir en la lucha por la vigencia de la democracia; el respeto a los Derechos Humanos —no solo en el Perú sino en el mundo entero dando a conocer masacres y genocidios ocultos por la gran prensa—; la ineludible defensa de los mínimos derechos laborales; el insobornable combate a la corrupción; la denuncia de abusos y maltratos a los más vulnerables; el develamiento de documentos de negociados truchos y de baja estofa; la difusión de la otra verdad tras la historia patria; el deslinde con las fuerzas conservadoras y retrógradas, así como con las izquierdas aggiornadas y el radicalismo petardista, actitudes que los han puesto en la mira de los que manejan no solo el poder, sino los que, perdiendo las elecciones, ahora gobiernan con la aprobación popular que no llega a un dígito y con las manos sanguinolentas.

Podríamos seguir enumerando otras batallas en las que ustedes se han comprometido, a fuer de ser honestos con sus ideales y convicciones, pero el objeto de estas líneas es tratar de convencer a los que pudiendo comprar cada semana en el quiosco del barrio, desesperadamente buscan tener la versión digital —por supuesto pirateada—, y entre los que lo hacen no me refiero a los agentes policiales; a los integrantes de los servicios de inteligencia; a los empleados de las oficinas de relaciones públicas del gobierno o de la establia de la plaza Bolívar.

No, no me refiero a ellos, que entiendo lo hacen por defender sus frijoles, sino a los dirigentes gremiales con licencia sindical vitalicia; a los pontificadores de los espacios democráticos desde los medios; a los intelectuales atildados que enseñan deontologías, éticas y filosofías; a los catedráticos que denostan del sistema; a los funcionarios de las ong que compran religiosamente en librerías "pitucas"; a los ayer guerrilleros de papel, hoy aupados en el aparato estatal; a los empresarios que se la llevan fácil; a los transportistas de servicio público con maestrías; a los representantes de casi todas las confesiones religiosas incluida la romana y apostólica; a los líderes de las diversas capillas izquierdistas que levantan banderas libertarias; a todos ellos, que los vemos en las redes sociales, muy activos cada jueves muy de noche o los viernes en la madrugada, solicitando a mensaje pelado de WhatsApp "...pásenme la última edición de Hildebrandt en digital..."

Y ojo, no me refiero al profesor de escuela rural, a los campesinos o comerciantes, artesanos o estudiantes de provincias que viven de las propinas familiares, o a los intelectuales empobrecidos, que interesados bajan a la ciudad más cercana a comprar su edición en físico; no, me refiero a los que, teniendo ingresos muy buenos, apoyan la piratería persistente del semanario y, de hecho, atropellan el sustento del mismo, dada su nula publicidad.

De esta forma me sumo a la llamada de la tribu —aunque el autor de esa frase, Mario Vargas Llosa, haya titulado uno de sus libros hace seis años con la misma—, instando a los que puedan a "poner la mano en el pecho y la otra en el bolsillo derecho" y comprar cada semana el semanario que es desde ya la conciencia crítica de todo buen demócrata. Los llamo a guardar una moneda de un sol diariamente para ir al quiosco los domingos —en provincias llega a fin de semana—, y así evitar el cierre prematuro de una revista que es un viento fresco en una atmósfera hedionda. Ojalá que este llamado tenga eco y veamos no morir esta publicación que no es solamente una piedra en el zapato de los poderosos, sino un ladrillo insufrible que les hace doler no solo los callos; contrariamente, lo que ocurriría es que, de la mano con la piratería cómplice, parecería que podrían conseguir cerrar este esfuerzo de casi tres lustros.

Roberto Romero Arce

DNI 23912772

Respuesta.- Muchas gracias. Con ciudadanos como usted, esta revista podría sobrevivir.

La llamada de la tribu

Este semanario se propuso pisar todos los callos posibles y ha llegado a ser, en efecto, una incomodidad. Ni el gobierno ni los grandes intereses nos quieren. Tampoco los políticos corruptos, los empresarios que cortan el jamón, los partidos políticos de fachada, las fuerzas del orden implicadas en denuncias sobre derechos humanos violentados, la izquierda bamba y el senderismo reciclado. Todos ellos nos quisieran desaparecer y por eso esperan, con alegría, que la piratería sistemática de nuestros contenidos y el descenso del poder adquisitivo de la gente terminen con esta aventura empezada en el 2010. Por eso es que este periodismo cercado, que es el nuestro, necesita ahora, más que nunca, de sus lectores. Queremos seguir cumpliendo con nuestra tarea. Ayúdanos a continuar.



Plutón Editores S.A.C.



Donar aquí con Yape

975 525 500

(Código QR SÓLO para donaciones)

Ahora le tocó a Telegram



DANIEL ESPINOSA

La censura sigue a toda marcha en Occidente, donde los medios de información que no puedan ser controlados serán silenciados. El último sábado 24 de agosto el dueño de la aplicación de mensajería Telegram —el ruso nacionalizado francés Pavel Durov (39)— fue arrestado por la policía francesa tras aterrizar en París. Se le acusa de no colaborar con la moderación de ciertos contenidos y la supresión de ciertas actividades en su plataforma digital, de las cuales sería "cómplice".

En realidad, a Telegram se le está persiguiendo por ser la firma tecnológica que menos coopera con los gobiernos occidentales en sus intentos de controlar la información. TikTok —otra de las plataformas digitales perseguidas— suele cooperar un poco más, aunque no lo suficiente.

Un poco de contexto: en abril de 2018, las políticas de privacidad y protección de datos de Telegram llevaron al gobierno ruso a tomar medidas para restringir el acceso a la plataforma, que hoy cuenta con casi mil millones de usuarios a nivel global. Durov, instalado en Dubái, se rehusó a acatar una norma legal que hubiera obligado a su plataforma de mensajería a entregar las contraseñas de sus sistemas de encriptación de mensajes cada vez que el Servicio de Seguridad Federal ruso lo solicitara.

Durov dijo que las demandas de esta agencia —sucesora de la KGB soviética— eran técnicamente inviables y, además, violaban los derechos de los rusos a la privacidad de sus comunicaciones.

El asunto es que al CEO de Telegram no le ha ido mejor en el alguna vez democrático y liberal Occidente. Aquí debemos mencionar que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. Sin embargo, nuestra posición es que la censura que avanza sobre Occidente no tiene otra intención que proteger el decadente sistema político-económico imperante de cualquier forma sustantiva de disidencia. El genocidio en Gaza no ha hecho más que acelerar el proceso.

A principios de este año, el gobierno de EE. UU. fue tras TikTok, la red social usada por 170 millones solo en ese país. Como reporté en esta columna el pasado 22 de marzo, detrás de las demandas de censura contra esta plataforma desobediente estaba, entre otros poderosos intereses, el régimen israelí de Benjamin Netanyahu. Como informó "The Economist" también en

marzo, la iniciativa del Legislativo estadounidense para obligar a los dueños chinos de TikTok a vender su plataforma a intereses occidentales "ganó impulso en parte como consecuencia de la preocupación ocasionada por cómo maneja la desinformación y el contenido antisemita luego del ataque de Hamás contra Israel de octubre".

Resulta indispensable traducir la terminología usada por la propaganda: "desinformación" no significa informa-

ción falsa o engañosa, sino inconveniente. Por su parte, "contenido antisemita" hace referencia, en este caso, a toda crítica o denuncia contra el régimen sionista.

Encontramos varias claves para entender el reciente arresto de Pavel Durov en un reciente artículo de "Haaretz" (21/08/24), uno de los diarios más importantes de Israel. Ahí se informa sobre el hackeo de información confidencial del Ministerio de Justicia israelí y su posterior publicación en canales de



Pavel Durov: el escarmiento contra quienes se atreven a retar al gran lobby israelí.

Telegram. El artículo señala cómo, "a pesar de la masiva inversión en medidas defensivas de ciberseguridad, la escala de las filtraciones parece ser la más severa en la historia de Israel...".

Cuando esta información sensible es filtrada al público a través de distintas plataformas digitales, las autoridades israelíes envían solicitudes a los gigantes tecnológicos para que las retiren de circulación. Como explica "Haaretz": "Recientemente, varias cuentas fueron dadas de baja por Telegram luego de publicar material hackeado". Entonces, no es que Telegram no coopere, sino que no es tan dada a cooperar como Google, Microsoft, Amazon o Meta, dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Estas cifras (tomadas del mismo artículo de "Haaretz") nos permiten

observar mejor las diferencias: "De acuerdo con números oficiales de Israel, su Ministerio de Justicia ha enviado a Facebook 40,000 solicitudes exitosas para dar de baja 'contenido ilegal'... Incluso TikTok ha dado de baja 20,000 publicaciones denunciadas por Israel. En Telegram el número solo llega a poco más de 1,300".

Según "Haaretz", Telegram es considerada "hostil a requerimientos gubernamentales... (y) ha probado ser un enorme desafío desde el inicio de la guerra... Mientras otras plataformas han hecho una cuantiosa inversión en moderadores, permitiendo que gente y organizaciones ayuden a monitorear el contenido... Telegram no lo ha hecho... (la aplicación) emergió como la plataforma más importante a través de la cual Hamás hace guerra informativa".

En cambio, la "guerra informativa" israelí se conduce a través de la gran prensa y las instituciones del establishment, que jamás le llamarán "terrorismo" a las continuas masacres de civiles inocentes en la Franja, ni siquiera cuando los francotiradores israelíes disparan directamente contra niños palestinos ("The Guardian", 02/04/24) o acaban con familias enteras arrojando bombas sobre sus casas ("Associated Press", 16/06/24). Este doble estándar es el rasgo que define a la prensa tradicional.

Más importante aún: Telegram es uno de los pocos medios de comunicación a través de los cuales el mundo está observando los crímenes de lesa humanidad israelíes.

Como mencionamos, "Haaretz" explica que las otras plataformas permiten un mayor monitoreo. Lo que no dice el medio israelí es que, tal como reveló Edward Snowden en 2013, estas plataformas trabajan en íntima colaboración con el complejo militar-industrial comandado por EE. UU., permitiéndole a sus agencias de espionaje y vigilancia el acceso directo a la información de sus usuarios a través de puertas traseras o "backdoors".

En su momento, lo revelado por Snowden —ahora exiliado en Rusia— fue aireado por todos los medios de prensa de Occidente (no les quedó otra). Sin embargo, desde entonces, toda referencia al programa "PRISM" de la National Security Agency estadounidense parece haber sido borrada del récord y no entra en la narrativa cuando se trata de explicar el reciente arresto de Durov y otros temas relacionados.

El pecado de Telegram es no formar parte de este tinglado de firmas tecnológicas privadas que le deben su prominencia y éxito comercial, en buena parte, a su subordinación al gobierno más poderoso del mundo, que lo premia con toda clase de favores.

El arresto de Durov es otro paso hacia un Occidente oligárquico, sin libertad de prensa e información, tal como en su momento lo fue la persecución de Julian Assange y WikiLeaks. ■

TELEGRAM ES UNO DE LOS POCOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE LOS CUALES EL MUNDO ESTÁ OBSERVANDO LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD ISRAELÍES

La Constitución del año 2023



PEDRO FRANCKE

Hace unos años se discutía sobre si la Constitución de 1993 era buena o mala y sobre esa base se diferenciaban las posiciones a favor o en contra de cambiarla. Sobre la economía, en particular, había posturas muy polarizadas al respecto. Me encuentro entre los críticos haciendo frente a la defensa cerrada de los neoliberales. En la campaña pasada, Keiko también hizo de esta defensa uno de los temas centrales de su campaña, alineada con la Confiap. Pero ahora la situación es muy distinta, aunque parece que no hay mayor consciencia de ello. Tenemos, de facto, una nueva Constitución, que podemos llamar la Constitución de 2023, bastante peor que la anterior. Salvo los cuatro partidos mafiosos que controlan el Congreso -APP, Fuerza Popular, Perú Libre y Avanza País- con una política de ultraderecha, el rechazo a los cambios constitucionales son totales.

El equilibrio de poder entre Ejecutivo y Congreso ha sido roto y se ha establecido de facto que quien manda es el Congreso. ¿Cómo? Primero hicieron trizas la disposición constitucional que permitía al Ejecutivo disolver el Congreso y convocar de inmediato a elecciones cuando este rechazaba dos cuestiones de confianza. Lo hicieron aprobando una ley que dice que el Congreso es quien debe decir si realmente hubo o no ese "rechazo", y es obvio que quien corre el riesgo de ser disuelto jamás decidirá que lo que hizo permite tal disolución. Nadie le entrega una pistola cargada a quien podría dispararle con ella. De esta manera se ha impuesto un cambio constitucional profundo, pero este Congreso repudiado por la ciudadanía lo ha aprobado simplemente como una ley, lo cual viola lo que dice la propia Constitución. El Tribunal Constitucional (TC), que esa misma coalición mafiosa de fujimoristas, acuístas, ultraderechistas y cerronistas eligieron, la convalidó sin ningún criterio jurídico. Quienes se decían defensores de la Constitución de 1993 y rechazaban cualquier cambio, son los que la han violado sin ningún reparo para modificarla.

El segundo gran cambio se dio cuando el TC estableció que el Congreso puede vacar al presidente cuando quiera, sin procesos ni requisitos establecidos, sólo porque considera por sí y ante sí que tiene "incapacidad moral". No requiere ningún proceso ni prueba, sólo la votación del Congreso. Con estas dos medidas el presidente está permanentemente con la soga al cuello, mientras al Congreso nadie lo puede tocar. Si hoy

por hoy este Congreso aún no ha vacado a Boluarte y puesto a uno de ellos de presidente (como se hizo en 2020 con Manuel Merino) es sólo por su propia conveniencia: Dina asesina hace todo lo que ellos quieren, y mientras tanto la coalición mafiosa se abre paso a controlar el Jurado Nacional de Elecciones para que el 2026 tengan asegurado un resultado favorable más allá de la voluntad ciudadana.

Añadamos a esto el cambio constitucional de establecer un Senado. El 90 por ciento de la ciudadanía, más de 13 millones de peruanos, dijeron que No a esta reforma en el referéndum de 2018. Aún peor es la forma como han decidido conformar el Senado: al tener

su mayoría elegida por distrito electoral único va a estar claramente dominado por los grandes medios de comunicación y poderes económicos que son los únicos capaces de sostener campañas a nivel nacional más allá de las presidenciales. Va a ser también muy centralista, dominado por Lima, como ya se vio en la experiencia previa 1980-1992, siendo que en Lima la ciudadanía ha venido votando mucho más a la derecha que el resto del país. Este Senado capturado, centralista y sesgado a la derecha va a tener la voz cantante en las leyes, ya que tendrá la facultad exclusiva de aprobar las versiones finales de todos los proyectos, y será también quien podrá destituir presidentes, jueces y fiscales,



Keiko Fujimori: modificando gansterilmente la Constitución golpista de su papá.

contralores y superintendentes. Como para que no quede duda del tenor antidemocrático de estos cambios, también se ha impedido que el Ejecutivo insista en torno a consultar a la ciudadanía mediante referéndum haciendo cuestión de confianza en ello, como hizo Vizcarra para el referéndum del 2018. Todo esto es la obra de un trabajo en pared entre el actual Congreso y su Tribunal Constitucional, controlados por el pacto de los partidos mafiosos.

EL MANEJO ECONÓMICO

Sobre el tema fiscal, la Constitución de 1993 en su artículo 79 dice muy claramente que "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos" y así lo defendieron quienes conformaban el TC durante treinta años. Era una buena disposición. Pero ahora este

Tribunal Constitucional ha establecido exactamente lo contrario y dice que los congresistas sí pueden hacer lo que la Constitución prohíbe sin ambages. Lo han hecho ya multitud de veces y lo acaban de hacer recién al aprobar la reforma de pensiones del fujimorismo que hace exactamente eso, mandata una serie de gastos públicos favoreciendo a las AFP. Junto con esto el TC ha perdonado deudas tributarias de las grandes empresas por 12 mil millones de soles y los congresistas han aprobado una docena de exoneraciones tributarias regalado a las grandes agroexportadoras 500 millones de soles anuales en las contribuciones que deben hacer a EsSalud. El resultado es una caída de la presión tributaria de más de 2,7% del PBI, o 2,700 millones de soles anuales, y un déficit fiscal que supera los 4 mil millones de soles anuales que se está tirando los ahorros públicos y endeudando al país por muchos años.

En política económica está muy claro quién decide ahora: ya no es el Ministerio de Economía, es este Congreso. Hay varios grandes problemas en este cambio. El primero es que no hay una persona responsable del manejo económico nacional, hay ciento treinta (y desde el 2026 serán ciento noventa). Todos sabemos que una institución, empresa u organización no funciona con decenas de jefes, necesita que haya sólo uno dirigiendo. El segundo problema es que se trata de un congreso fragmentado sin que haya partidos reales detrás, de tal manera que resulta imposible pensar en un gobierno parlamentario basado en un pacto programático al estilo de las democracias europeas. Lo que tenemos acá son varios grupos mafiosos, inestables, que pactan entre sí intercambiando favores -de poder político, de normas para su protección ante la justicia y económicos-. El grupo A vota para darle ventajas al grupo B a cambio de lo cual B votará regalando otros millones para A, e igual actúan con C y D. En cada grupo, además, muchos congresistas se concentran sólo en sus propios intereses. Es probable que nada de eso cambie el 2026. En todo el milenio no ha pasado ni una sola vez que un solo grupo gane la presidencia y la mayoría del Congreso. La única vez que un solo partido tuvo la mayoría del Congreso, el fujimorismo el 2016, se dividió y dejó de tener esa mayoría dos años después: a pesar del férreo control de Keiko sobre la bancada, varios congresistas prefirieron buscar otras formas de sacar ventaja. En ese entonces, sin embargo, la vigencia del artículo 79 de la Constitución les ponía un límite fuerte y defendía el equilibrio fiscal. Ese límite ya no existe.

Hace tiempo sabemos que estamos bien fregados. Lamento traer malas noticias, pero la dificultad va más allá de este gobierno. Se han traído abajo la democracia y las posibilidades de tener un gobierno mínimamente razonable. Recuperarla va a ser una tarea hercúlea. ■

SE HAN TRAÍDO ABAJO LA DEMOCRACIA Y LAS POSIBILIDADES DE TENER UN GOBIERNO MÍNIMAMENTE RAZONABLE

Al asalto de la JNJ



RONALD GAMARRA

La coalición congresal encabezada por el fujimorismo, que articula a la ultraderecha, el cerronismo y otros grupos mafiosos tras el gobierno de Dina Boluarte, se propone, ahora sí, tomar el control definitivo de la Junta Nacional de Justicia. El plazo de los actuales integrantes de la JNJ vence a fines de este año, indefectiblemente. Si bien el fujimorismo y sus aliados se jugaron a fondo para destituirlos sin motivo válido, no lo lograron gracias a amparos judiciales que corrigieron los atropellos alevos. No se puede descartar, sin embargo, que vuelvan a intentarlo aún en estos meses postreros, pues su capacidad para el acuchillamiento, la venganza y el agravio artero es imprevisible.

Ahora se trata de otra cosa. Hay que designar a los nuevos integrantes de la JNJ para ejercer el cargo durante los próximos cinco años. Ello se hace mediante concurso público convocado y definido por una comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Conscientes de esto, los de la coalición fujimorista se han esmerado en estos años en digitar a los que forman parte de la comisión especial y asegurarse la mayoría en ella para hacerse con el manejo y la dirección de la nueva JNJ. Con ello lograrán ejercer un poder temible sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público, que les permitirá someter a jueces y fiscales a un control arbitrario, expulsar a los magistrados que se atrevan a investigar por los innumerables delitos por los cuales se indaga a congresistas y miembros del gobierno, y llenar la judicatura con jueces y fiscales mafiosos, como en los tiempos de sus tan defendidos "jueces hermanitos" encabezados por el prófugo juez supremo César Hinostroza, el de los servicios comprometidos a "la señora K".

La comisión especial encargada de seleccionar a los nuevos integrantes de la JNJ está presidida por el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, y la integran Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial; Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación; Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional; César Aguilar, Contralor General de la República; Jeri Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; y Félix Romero, rector de la Universidad Ricardo Palma.

Los nombres, y las historias, no de-

jan lugar a ninguna duda. Esta comisión especial no ofrece ninguna garantía de imparcialidad y objetividad, pues cuatro de sus siete integrantes responden directamente al mandato del bloque articulado por el fujimorismo. Recordemos que el presidente de la comisión, Josué Gutiérrez, fue nombrado Defensor del Pueblo sin ningún otro mérito que su obsecuencia incondicional a Vladimir Cerrón y, como resultado de la negociación y acuerdo establecido entre los Cerrones y el fujimorismo, fue puesto en el cargo para digitar precisamente este proceso de selección para la JNJ, entre otras tareas. Josué Gutiérrez no es un simple presidente formal. En la práctica, él tiene el control ejecutivo de

todo el proceso de selección y su direccionamiento.

También son obvios y obsecuentes servidores de la coalición encabezada por el fujimorismo el presidente del TC, organismo nombrado por este Congreso, que se ha convertido en una mesa de partes de sus atropellos y legicidios; así como el Contralor General, designado por el Parlamento a propuesta de Dina -tu mamá- Boluarte, nada menos, que ha de ser tan funcional a la coalición gobernante como lo fue su antecesor Nelson Shack. Lo mismo cabe decir de la rectora de San Marcos, especialmente activa en la destrucción de la SUNEDU, objetivo alcanzado plenamente por la mafia "educativa" que tantos miembros



Josué Gutiérrez: sirviente de Cerrón, pieza clave de la mafia gubernamental y eventual "Defensor del Pueblo".

tiene entre los actuales congresistas.

No hay razón para esperar nada bueno de una comisión conformada de este modo. Al contrario, de ella solo se puede esperar la venia y el chichén al naranjismo y su sueño de tener bajo su red a la administración de justicia. Por ello, respondiendo a la preocupación que desde hace ya tiempo existe en torno a las vulneraciones de la democracia y el estado de derecho en nuestro país, un conjunto de entidades de la sociedad civil de nuestro continente conformó una Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia (MIO-Perú), que desde hace meses evalúa con creciente preocupación el proceso que lleva adelante la comisión especial presidida por el Defensor del Pueblo. Recientemente, la MIO concluyó su segunda visita de observación, y al término de ella advirtió con marcada inquietud el serio déficit de transparen-

cia que muestran las primeras etapas del concurso para la selección de los nuevos miembros de la JNJ, en relación con la aprobación del reglamento y las bases del concurso, la convocatoria a las personas interesadas y la publicación de los antecedentes de los postulantes.

En resumen, la Misión Internacional de Observación constata que el proceso que lleva adelante la comisión especial carece de transparencia y no ofrece las garantías mínimas para producir nombramientos idóneos. Este domingo, prácticamente entre gallos y gatos ron ron, la comisión especial procedió a tomar el examen escrito de conocimientos entre los 51 postulantes y declaró aprobados a una veintena de ellos. Ninguno es un profesional conocido, ninguno tiene un récord en materia de derechos humanos, ninguno cumple con la ejecutoria necesaria e imprescindible en aquellos que van a cumplir las muy delicadas funciones de control sobre jueces y fiscales. Ya sabemos que los tunantes de Plaza Bolívar y este gobierno de sangre y rolex desprecian el mérito, el conocimiento y la ejecutoria. En su

lugar, promueven, en cambio, la mediocridad, el caciquismo, la complicidad, la obsecuencia.

La Misión, a pesar de los obstáculos opuestos a su labor, proseguirá su tarea de observar y dejar constancia del proceso de selección seguido por la comisión especial. La integran cuatro juristas de primera línea, como Thelma Aldana, guatemalteca, Fiscal General de su país entre 2014 y 2018, y antes presidenta de la Corte Suprema, que se distinguió por su decidida lucha contra la corrupción desde las esferas más altas del poder y por ello fue perseguida por el "pacto de corruptos" que dominó Guatemala en los últimos años. Por su parte, Stephen McFarland es un destacado diplomático norteamericano, embajador en Guatemala entre 2008 y 2011,

y alto funcionario de las embajadas de su país en varios países de América latina, incluido el Perú, país que conoce desde muy joven pues terminó la escuela secundaria en Lima.

También integra la MIO Jaime Arellano, jurista chileno, destacado miembro del Partido Demócrata Cristiano, que desempeñó altas funciones durante el período de recuperación de la democracia en su país, entre ellas el cargo de ministro de Justicia entre los años 2000 y 2006. Finalmente, Edison Lanza, jurista y comunicador uruguayo, desempeñó el alto cargo de Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre 2014 y 2020, y es autor de varios libros, entre los cuales destaca el titulado "La corrupción y su freno: Ciudadanía, instituciones y normas", tema tan pertinente a la realidad actual de nuestro país. ■

CON ELLO LOGRARÁN EJERCER UN PODER TEMIBLE SOBRE EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO



Depender de una rata

Es peligroso salir de vacaciones. Puede uno volverse loco.

Porque, al regresar, todo está allí, impertinente: el dinosaurio, la presidenta idiota, el ministro especialmente turbio, el TC de los magistrados al peso, el congreso del crimen organizado, el herpes del fujimorismo, la prensa que anda de puntillas y farfulla solemnidades.

Es como si uno no se hubiese ido, como si todo hubiera sido una ilusión, como si despertáramos al día siguiente del mismo aburrimiento en el país inmóvil de las repeticiones.

Jorge Bruce aludía hace poco a aquella película que clonaba, hasta la exasperación, los días de una marmota reincidente.

Pues eso es. En el Perú, a falta de marmotas, una rata se asoma a la ventana de un solar polvoriento y profetiza: vivirás el mismo día.

Y en eso estamos. Siempre en el vestíbulo de la fábula, en el porche de las realizaciones, a las vísperas de las hazañas: un cuasi país de pasmados ciudadanos.

¿Cuándo se jodió Zavalita?

Cuando se resignó, cuando normalizó lo inaceptable, cuando asumió la gran mentira de una historia contada por el patriotismo más infantil.

Un país que vende cerros y comidas y que, entre otros deméritos, ha depravado la educación pública universitaria no debería pensar en un futuro colosal. Y sin embargo, seguimos diciendo que el destino es nuestro y que derrotaremos a Goliat. "Los comentarios reales" son nuestra Torá.

La derecha nos hizo creer siempre que seríamos grandes obedeciendo. La izquierda propuso que la tortilla se volteara y que una dictadura inversa era la solución. El resultado siempre fue el mismo: cadáveres, resentimiento, frustración.

De la extrema incultura salen extremismos. De la educación pueden emanar centrismos más justos, soluciones más complejas, equidistancias sabias y quizá exitosas.

Del capitalismo salvaje nació Marx y del zarismo antisocial surgió Lenin. Si la burguesía de la revolución industrial no hubiese hecho de la codicia una diosa, habría sido Karl Kautsky, un socialdemócrata, el líder mundial de las izquierdas. Nos habríamos ahorrado millones de muertos y décadas de un experimento social que terminó desprestigiando la insumisión.

La actual polarización política del Perú nace de la pobreza de nuestra agenda, de la miseria de nuestra vida académica, de la indigencia de nuestros debates, de la fuga de nuestra inteligencia. Los argumentos que se leen o escuchan son banales y *ad hominem* porque las ideas parecen proscritas en la barbarie que hemos ido construyendo.

Sin partidos políticos, sin líderes, prescindiendo de visiones del mundo y de propuestas nacionales que merezcan ese título, el Perú se ha entregado a una mafia. Un puñado de delincuentes gobierna el país mientras el narcotráfico, la devastación forestal y la minería ilegal crecen a la sombra de este régimen repugnante.

No ha habido un golpe de estado formal ni se ha requerido de tanques o proclamas. Lo que se ha producido es que bandas de okupas han entrado al congreso y al palacio de la plaza de armas y han cambiado

destino y cerraduras. Son ellos los que dictan las reglas y los que nos han convertido en este simulacro de país.

¿Hasta cuándo? Hasta que lo sigamos permitiendo. Dependemos de una rata asomada a la ventana de un solar polvoriento. ■



La señora Dina Boluarte en el palacio de la Plaza de Armas el lunes 26 de agosto.

FOTO JOEL DURAN

UN PAÍS QUE VENDE CERROS Y COMIDAS Y QUE, ENTRE OTROS DEMÉRITOS, HA DEPRAVADO LA EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSITARIA NO DEBERÍA PENSAR EN UN FUTURO COLOSAL

Chifa Kam Lu Wantán



Independencia tramposa

La historiadora Cecilia Méndez ha estudiado la trepa oposición a la independencia de parte de una colectividad nativa de Huanta, Ayacucho. Aquellos "iquichanos" no fueron los únicos. Existen evidencias de que hubo otras colectividades indígenas que experimentaron aprensión y recelo respecto a la ruptura con España.

Sospecho que tenían que, desaparecida la monarquía, quedarían más expuestas aún a los excesos de los españoles americanos que la Corona, mal que bien, había intentado refrenar en reiteradas ocasiones.

Jorge Basadre percibió con claridad la indolencia criolla: "Al iniciarse la República, supervivieron... las bases generales de la vida social. Continuó la división de castas [...]". Los indios "siguieron siendo el barro vil con el que se hace el edificio social; los negros continuaron como gente anexa a las viejas casonas y a las grandes haciendas costeñas". "Los organismos políticos

fueron modificados: ya no Virrey sino Presidente [...]".

San Martín, al pretender instaurar una monarquía constitucional con algún príncipe europeo, sostuvo que lo principal era lograr romper con España y solo después pensar en establecer la libertad sólidamente, según relata Cristóbal Aljovín en su libro *Caudillos y Constituciones*.

Lograda nuestra Independencia el desinterés por lo autóctono y el desdén por la integración, aunados al caudillismo inicial, a la repartija de la consolidación y a las consignaciones guaneras, terminarían justificando el recelo indígena.

Lo que hubo con la Independencia fue la sustitución de una oligarquía de chapetones por una de criollos.

El historiador Niall Ferguson ha señalado que hacia el año 1900, mientras más del 90% de las familias norteamericanas eran propietarias de tierras aptas para la agricultura, en Suramérica no superaban el 9%. En aquellos tiempos la concentración de la propiedad de la

tierra revestía una importancia capital debido a que la agricultura era el principal medio de producción de la época, por lo que los únicos capaces de acumular y consecuentemente prosperar eran sus propietarios.

Instaurado en el Perú el capitalismo de cuatro gatos, sólo quedaba exportar para satisfacer demandas foráneas y la competitividad exportadora dependía de que la mano de obra fuera barata.

Las consecuencias del semifeudalismo originado a inicios del virreinato con la implantación de la Encomienda continuaron gravitantes hasta bien entrado el siglo XX.

Durante el siglo XIX, una actividad productiva alternativa fue la minería, pero según el Padrón de Minas de 1886, a dos generaciones de la Independencia, de 1,456 concesiones mineras otorgadas por el Estado, solo dos pertenecían a emprendedores de origen andino: los señores Mayta e Imaña.

En los Estados Unidos, en cambio, los más de 35 millones de colonos que



RAFAEL BELAUNDE AUBRY

arribaron de Europa durante el siglo XIX accedieron de manera casi automática a la propiedad privada de las tierras en las que se asentaron.

Como el derecho de propiedad es el núcleo del capitalismo, el incentivo que su aprovechamiento implica derivó en la generación de excedentes difuminados entre decenas de miles de emprendedores.

En nuestro medio, en ausencia de una dinámica que privilegiara la libertad económica y más bien acentuara la dependencia laboral, la prosperidad fue un espejismo.

Argumentar, como sugieren algunos conservadores, que la Independencia fue prematura y que nuestro inicial fracaso republicano fue producto del analfabetismo, de una burguesía incipiente, de falta de infraestructura física y de fronteras pobremente delimitadas, es pretender tapar el sol con un dedo. La independencia no fue prematura: fue tramposa porque con su advenimiento se falsificaron los conceptos de libertad, democracia y ciudadanía y porque el acceso a la propiedad quedó tan restringido como antes.

Si aún no hemos logrado vencer a la pobreza, es debido a que tanto izquierda, centro y derecha se resisten a desterrar los esquemas tuteladores, prebendarios y dirigistas que nos asfixian y que han convertido nuestro sistema político en una repugnante oclocracia. ■

Mi problema con Roro



PEDRO CASUSOL

"A Pablo le encantan los sandwiches de queso...", dice Roro, voz modosita, mirada baja, atuendo impecable, rostro compungido y bien maquillado. La vemos dejar un recipiente con harina y una fuente de vidrio sobre una repisa. El encuadre la muestra en la cocina, donde se alcanza a ver una balanza digital, otros utensilios. Mientras, su locución en *off* nos sigue informando sobre sus intenciones: ella le va a cocinar a Pablo, de sorpresa, un sandwich de queso "para merendar". Y eso, según parece, implica crear la masa desde cero, cortar la leche para preparar el queso. ¡Qué suerte la de Pablo!

La *influencer* Roro, de 22 años, ha estado las últimas semanas en el centro de la polémica a causa de estos videditos de TikTok. Se le acusa de ser la punta de lanza del movimiento "tradwife" en España, una suerte de corriente opositora del feminismo que aboga por recuperar el ideal de la es-

posa sumisa, ama de casa, cuidadora del hogar tradicional, los roles de género. El hombre debe ser el proveedor económico de la casa, la mujer debe de criar a los hijos, esforzarse por lucir bonita y cocinar delicias. Justo lo que Roro hace para su novio Pablo de manera tan dedicada en cada uno de sus videos, los mismos que acumulan millones de vistas en la plataforma juvenil por antonomasia.

Pero lo que llamamos "tradwife" (mezcla de los vocablos en inglés "traditional" y "wife") parece estar más cerca de una corriente estética o una moda surgida en Instagram que de una verdadera respuesta al empoderamiento femenino. El chiste es imitar la ropa, el peinado de los años cincuenta, los ideales matrimoniales que encandilaban a nuestras abuelas. El asunto resulta tan trivial que casi parece que no hubiera una doctrina debajo de ese discurso, aunque la hay. Es lo que vienen practicando

personajes como Ballerina Farm, Estee Williams o Nara Smith (tampoco es que Roro haya inventado algo). Estamos hablando de mujeres que defienden la labor doméstica vista como *performance* ante la cámara. El simulacro estético que alguna vez encarnó Vilma Pica Piedra.

Vamos, ¿qué me puede importar a mí que Roro le haga un bocadillo a su novio Pablo? Y que, para hacerlo, tenga que preparar la masa de pan con levadura y después el queso de manera sorprendente, contándonos con vocedita suave y tranquila cómo es que hace paso a paso una receta tan tirada de los pelos que, durante semanas, las redes se vieron inundadas de parodias en las que Roro propiciaba el "big bang" o restauraba el imperio español solo para satisfacer al papanatas de su novio, quien, dicho sea de paso, no dice una palabra y únicamente aparece al final para engullir lo que sea que le haya preparado y darle, eso sí, un beso a su esmerada noviecita.

¡Quién como tú, Pablo!

Solemos olvidar que lo que vemos en redes sociales como TikTok o Instagram no es más que una ilusión, una mentira. La misma Roro ha tenido que salir de la cocina para decir que no entiende por qué tanto alboroto: ella solo quiere colgar esos videos mostrando recetas imposibles, o la vez que quiso regalarle a su novio "El príncipe" de Maquiavelo y no tuvo mejor idea que imprimir ella misma el libro, diseñar la cubierta, coser las páginas y empastarlo con sus propias manos. ¡Ya basta, Pablo! Lo que nos restringen en la cara estas *influencers* que idealizan unas labores domésticas que en realidad no practican es el tiempo libre del que disponen.

¿Quién puede preparar un sandwich desde cero? ¿Con qué tiempo? ¿Para qué? Se trata, por supuesto, de una ficción. Lo que interpreta Roro no es más que un personaje con voz circunspecta y lentes enormes que juega a ser la novia perfecta. El guion solo toma a Pablo como gancho narrativo: el susodicho aparece para el desenlace porque ese es el final correcto para el producto comercial que venden. Dudo mucho que Roro lo ignore. Tiene poco más de dos meses de existencia en TikTok y sobrepasa los cinco millones de seguidores. "Los likes justifican los videos", diría hoy Maquiavelo. ■

Demócratas de papel



RODOLFO
SÁNCHEZ-AIZCORBE

En el Perú la izquierda política tiene el mismo nivel de precariedad democrática que la derecha política. Ambos grupos o corrientes pretenden estar en las antípodas y combatirse mutuamente, pero se parecen mucho más de lo que creen. Las reacciones a las elecciones en Venezuela han acabado por mostrarnos cuánto se parecen.

En un vergonzoso comunicado de la Coordinadora de Organizaciones de Izquierda y Progresistas, del 9 de agosto pasado, varios partidos de izquierda (entre ellos, sorprendentemente, Nuevo Perú, que se suponía una izquierda más democrática) respaldaron el fraude electoral perpetrado en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro.

En el comunicado camuflan su defensa de la elección fraudulenta como una defensa de la soberanía de Venezuela ante la injerencia ex-

tranjera. Además reclaman el respeto a lo que decidan las instituciones del país, esto es, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fingiendo creer que estos organismos son realmente independientes.

Finalmente rechazan la política exterior del gobierno peruano y a su canciller González Olaechea porque "se adelanta a denunciar un fraude electoral en las elecciones venezolanas y reconoce al perdedor ultraderechista González Urrutia como presidente, de la misma manera que lo hizo con el fujimorismo en las elecciones del Perú en 2021".

Llama la atención esta referencia del comunicado a las elecciones peruanas del 2021. Compara cosas que no son comparables. En aquel año el fujimorismo quiso desconocer un resultado legítimo, pero lo que acaba de ocurrir en Venezuela es un fraude monumental. Tanto es así que, se-

manas después de las elecciones, el CNE aún no publica las actas.

La izquierda política critica con razón el autoritarismo creyente en nuestro país, pero es incapaz de reconocer la dictadura franca en Venezuela. La derecha política hace exactamente lo opuesto. Critica con razón a la dictadura venezolana, pero al mismo tiempo va construyendo una en nuestro país, paso a paso.

La derecha dice ahora defender el legítimo resultado electoral en Venezuela, pero es la misma derecha que trató de desconocer los resultados electorales en el Perú en 2021. El verdadero intento de fraude fue precisamente el que ella quiso perpetrar robándole los votos a los más pobres del Perú alegando, falsamente, suplantaciones en las mesas de votación.

La izquierda habla de la defensa de los derechos humanos en el Perú, pero calla sobre la represión y las vio-

laciones de los mismos en Venezuela; mientras que la derecha denuncia la represión y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, pero calla o las justifica cuando las comete el gobierno de Boluarte.

Ambas, tanto la izquierda como la derecha política, hablan de respeto a la soberanía y la no injerencia en función de quiénes gobiernan. La primera invoca esos principios para defender al régimen dictatorial de Maduro, y la segunda para blindar los arrebatos autoritarios del actual gobierno y Congreso peruanos.

La derecha política quiere hacer con la democracia en nuestro país lo mismo que ya ha hecho o está haciendo Maduro con la democracia venezolana: tomar el control de todos los órganos judiciales y electorales, silenciar a las ONG incómodas al poder, sacarnos de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y un largo etcétera.

Los representantes de las izquierdas y las derechas realmente existentes en el Perú (es decir, de las que tienen algún nivel de organización o forman partidos políticos) son exactamente iguales en su doble estándar y nulo compromiso real con la democracia. Son, en suma, demócratas de papel. ■

Borges y Cortázar



ROBERTO RAMÍREZ
MANCHEGO

Cuando el tiempo era la sustancia de la que estaban hechos, Jorge Luis Borges cumplía años el 24 de agosto y dos días después lo hacía Julio Cortázar. Este mes se celebran 125 años del nacimiento del autor de *Ficciones* y 110 años del creador de *Rayuela*.

Descubrí a Cortázar en el colegio, gracias a un profesor entusiasta y pícaro que nos mandó a traducir el capítulo 68 de *Rayuela* (escrito en gliglico: idioma erótico inventado por Cortázar). Recuerdo las sonrisas de mis compañeros y compañeras, los rostros colorados y los traviesos murmullos: éramos adolescentes, éramos sensibles —quizás algunos lo sigan siendo— y todo en ese texto nos electrificaba. No me acuerdo si cumplimos a cabalidad con la tarea,

pero sé que desde ahí una puerta se abrió en algunos de nosotros: a la semana siguiente, juntando las propinas, compré *Rayuela*. Leí la novela con entusiasmo, traté de encapsular ese universo en una libretita donde apunté todo lo que desconocía, sucumbí a las veleidades de la Maga y atisbé los meandros de la adultez con Horacio Oliveira.

Luego de unos años, conocí al Cortázar cuentista, al de *Una flor amarilla*, ese relato donde un hombre maduro comprende que todos los humanos son inmortales, avatares de alguien más, condenados a repetir una absurda cadena existencial: "Bien podría suceder que el panadero de la esquina fuese un avatar de Napoleón y él no lo sabe... que pasar de lavaplatos a dueño de una buena panadería en Montparnasse es la misma figura que

saltar de Córcega al trono de Francia". Este hombre, sin embargo, es mortal; por azar conoce al chico que iba a repetir su historia, pero el muchacho desaparece y él es feliz por un tiempo sintiéndose único, sabiendo que morirá definitivamente sin que nadie más repita su adultez decadente ni su fracaso. Hasta que ve una flor amarilla, una flor bella. Pero él morirá y nadie se enrolará en su cadena, no tendrá un avatar, no habrá más flores bellas para tipos como él. Entonces comienza a delirar tratando de encontrar a alguien que repita su cadena: solo para que ese posible avatar suyo pueda participar de la belleza al ver una flor amarilla.

Los últimos libros de Cortázar manifiestan el compromiso con los derechos humanos y contra toda forma de injusticia, ideales que siempre

mantuvo en vida. Era un hombre coherente.

A Jorge Luis Borges lo descubrí después. Su palabra cuidada, el laberinto del tiempo, sus irónicas invenciones, los dobles, la eternidad, sus compadritos y sus cobardes me maravillaron; pero a él no lo llegué a comprender. Apoyó a Videla y Pinochet lo condecoró. Hace unos años, se publicó un libro inclasificable, hecho de las notas que su amigo Bioy Casares tomó durante los muchos años que fueron confidentes: ahí me enteré que Borges era múltiple.

Cortázar lo admiraba. Su cuento *Casa Tomada* apareció en la revista *Anales de Buenos Aires*, donde Borges era secretario. Un joven Cortázar lo buscó una tarde y le entregó el manuscrito del cuento, a este le agradó y fue impreso con ilustraciones de su hermana Norah Borges. Fue su primera publicación. En la misma revista publicó el cuento *Bestiario* y luego artículos de crítica.

En algunas obras ambos rozan los mismos tópicos: el tiempo, los laberintos, los dobles, las coincidencias. Políticamente eran opuestos. En la eternidad, que sigue siendo un instante, los dos son descomunales. ■

Fraude demostrado en Venezuela



YBRAHIM LUNA

Una semana antes del 28 de julio en Venezuela, día de los comicios electorales presidenciales, las encuestadoras más serias de dicho país consultaron a los ciudadanos si creían que las elecciones serían justas e independientes. Solo un 22% respondió en tono afirmativo. Esa cifra coincidía con el 24% que, en esas mismas encuestas, afirmaba que votaría por la reelección del presidente Nicolás Maduro. La mayoría, el 60% que apoyaba al candidato opositor Edmundo González, intuía que las probabilidades de que Maduro entregase el poder tras 25 años de chavismo eran prácticamente nulas. Pero la coincidencia y contundencia de los sondeos más fiables, un notorio nerviosismo del oficialismo y la gran expectativa internacional hicieron creer a muchos que esta vez el cambio sí sería posible a través del voto.

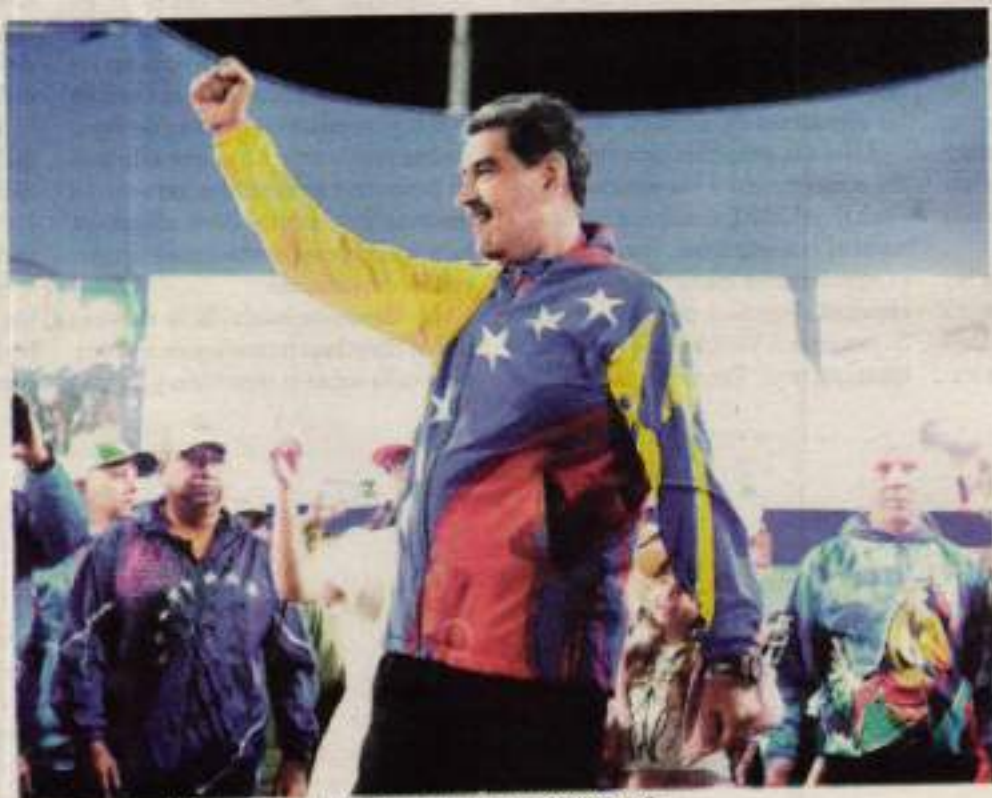
El asunto de fondo es que Maduro (y su séquito político-militar) sabe que no puede entregar el poder, porque sería como entregar las muñecas para ser engrillado y sometido a un proceso judicial sumarisimo. Lo que estuvo en juego el 28 de julio no fue la continuidad de una "revolución", sino la libertad de la cúpula chavista y miembros de las fuerzas armadas acusados de corrupción y violaciones de los Derechos Humanos. Venezuela está en un proceso de cubanización que el chavismo ha estimado en 50 años (recién van 25). Y una elección "democrática" no iba a detener tal objetivo superior. El asunto para el chavismo (hablar de "madurismo" resulta insuficiente) es cómo simular cierta competencia democrática cuando se ha perdido, por desgaste natural, el apoyo de buena parte del sector popular y de los aliados de la región.

Durante mucho tiempo, el chavismo hizo alarde de que poseía un sistema electoral impecable amparándose en las declaraciones de 2012 del expresidente estadounidense Jimmy Carter: "De las 92 elecciones que hemos supervisado, diría que el proceso electoral de Venezuela es el mejor del mundo. Tienen un sistema de votación maravilloso. Uno entra, toca la pantalla y vota como quiere. Al instante, ese voto se registra y se transmite electrónicamente a la sede central de recuento, pero también imprime una papeleta y puedes asegurarte

de qué es lo que votaste. Esa papeleta se deposita en una urna para comprobar después los resultados". De hecho, el Centro Carter fue uno de los invitados directos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela este 2024, bajo el amparo de los Acuerdos de Barbados de 2023 entre el oficialismo y la oposición.

El 31 de julio el Centro Carter publicó un informe demoledor sobre las elecciones venezolanas, asegurando que los co-

micios no se cifraron a los parámetros y estándares internacionales; y que lo que hizo el CNE, al no mostrar los resultados desglosados por mesa, constituyó una grave violación de los principios electorales. El 8 de agosto el Centro Carter, bajo la dirección de Jennie K. Lincoln, confirmó la victoria del candidato de oposición Edmundo González Urrutia, con el 60% de los votos, luego de revisar y verificar la autenticidad de las actas publicadas



Nicolás Maduro: la derrota popular tergiversada a la hora del "conteo".

por la oposición. Finalmente, el Centro Carter señaló que no existen pruebas de un hackeo internacional al sistema electoral venezolano como lo denunció el chavismo, y que fue excusa para una demora sospechosa.

El canciller venezolano Yván Gil respondió que el Centro Carter apoyaba un golpe de Estado y a las "hordas fascistas". Maduro, por su parte, dijo que el informe del Centro Carter ya estaba escrito hacía un mes y que solo le faltaba agregar el "picantico" tras la publicación del primer boletín del CNE (Maduro 51%, González 44%). Se divorciaba así el chavismo de su principal referente de justificación electoral internacional.

Situación similar ocurrió con el Panel de Expertos Electorales de las Naciones Unidas, otro invitado del mismo CNE, con su informe del 14 de agosto, donde concluyó que el CNE no "siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y todos los plazos establecidos fueron

incumplidos", y que las elecciones venezolanas no garantizaron los principios básicos de transparencia e integridad para unos comicios creíbles. La cancillería venezolana y los líderes chavistas acusaron al panel de presentar un informe "plagado de mentiras".

Hay que señalar también que los "veedores" invitados (no confundir con "observadores") de países y movimientos políticos simpatizantes con el chavismo dieron su conformidad al proceso electoral.

Por ahora, de los gobiernos de izquierda de la región, solo Chile ha desconocido abiertamente la victoria de Maduro. Bolivia comunicó su felicitación al presidente en funciones el mismo 29 de julio. Colombia y Brasil siguen recomendando (casi rogando) al CNE que muestre las actas por mesa para zanjar las dudas. Mientras que México recurre al argumento de la libre determinación de los países. El gobierno venezolano ha dado por concluida la disputa electoral luego de que el 22 de agosto el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, validara la victoria de Maduro e iniciara una investigación contra la oposición.

Es bueno aclarar que nadie medianamente sensato está a favor de una intervención de Estados Unidos. Las estúpidas declaraciones de John Kirby, vocero de Seguridad Nacional de EE.UU., del 31 de julio, asegurando que "se les está agotando la paciencia", no hicieron más que despertar viejos fantasmas y dar argumentos en contra de la "injerencia imperialista". Acá tampoco se trata de encumbrar a la derecha venezolana, de tradición golpista y tan adicta a los halcones de la Casa Blanca. Corina Machado no es Salvador Allende.

De lo que se trata es de evidenciar el fin del argumento electoral que el régimen chavista esgrimía como aval de su legitimidad por sobre sus tropelías sociales y políticas. Mientras más se demore el CNE en publicar las actas, más dudas habrá sobre su veracidad. El lunes 26 de agosto, desde la clandestinidad, Juan Carlos Delpino, nada menos que uno de los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral, denunció a través de un comunicado: "Todo lo ocurrido antes, durante y después de la elección presidencial, señala la gravedad de la falta de transparencia y veracidad de los resultados anunciados".

En medio de esta crisis, lo cierto es que Estados Unidos ha aprendido la lección y difícilmente volverá a validar un nuevo Guaidó con quien no pueda hacer tratos reales sobre el petróleo llanero. Y, por supuesto, Nicolás Maduro no va a caer mientras mantenga el apoyo incondicional de las fuerzas armadas.

EL 8 DE AGOSTO EL CENTRO CARTER, BAJO LA DIRECCIÓN DE JENNIE K. LINCOLN, CONFIRMÓ LA VICTORIA DEL CANDIDATO DE OPOSICIÓN

▶ Maduro y los sacrificios



CARLOS LEÓN MOYA

En este vacacional agosto —mientras Dina Boluarte cantaba el gato ron ron disfrazada de pericote y en Venezuela las elecciones se resolvieron con el candidato perdedor encarcelando a los ganadores—, leí al fin “La conjura”, un reportaje de Mónica González sobre la planificación del golpe de Estado contra Salvador Allende.

De seguro hablé en voz alta del tema, porque dos días atrás el algoritmo de Youtube —que tiene mil ojos y mil oídos— me puso en frente la “Crónica del día en que Chile cambió de golpe”, un video de 24 minutos y 51 segundos producido el año pasado por la Televisión Nacional de Chile. No lo busqué ni lo pedí, pero Youtube se entrometió y le agradecí la sugerencia.

Cuando hago labores caseras —aspirar, limpiar los pelos del perro—, pongo siempre un video para no sentirme tan miserable. Y prefiero que sea de un tema que ya conozco, para no distraerme tanto. Así que puse “play” al video mientras lavaba los platos.

Pero una frase me llamó la atención. En el minuto 10:22, el exministro de salud de Allende, Arturo Jirón, que estuvo con él en Palacio de La Moneda durante el golpe, cuenta que Allende les dijo a todos antes del bombardeo que él “no quería héroes”. Que se fueran. Que él iba a quedarse, pero que no quería sacrificios.

¿Por qué me llamó tanto la atención esa frase? Creo que por la relación entre heroísmo y sacrificio. En su discurso final, que habré oído doscientas o trescientas veces, Allende dijo que el pueblo debía defenderse, pero no sacrificarse. Y me quedé pensando, mientras pasaba el Ayudín por el plato con yema de huevo, en qué era lo

heroico, en qué sacrificio político es considerado válido, y en qué carencia de referentes tenemos ahora para tener que pensar en estas cosas por un discurso del 11 de septiembre de 1973. Porque si llevo esta discusión al presente —lo heroico, la izquierda, el sacrificio—, me pongo a llorar sobre el lavadero.

Pienso en Venezuela. Desciendo de Allende a Nicolás Maduro.

No hay mucho nuevo que decir sobre Maduro. Perdió una elección en la que

controlaba los organismos electorales, el sistema de justicia y las fuerzas del orden. ¿Qué hizo? Manipuló los resultados sin presentar las actas de escrutinio —que la oposición sí mostró, y que prueban que los resultados finales no se derivan de los votos en mesa—, y luego detuvo a los opositores con cargos falsos —o sin ellos— presentados por la fiscalía. A eso, sumémosle la muerte de 25 manifestantes en apenas cuatro días, como reportó la ONG Provea.

¿Y qué tiene eso que ver con el he-



Salvador Allende, presidente constitucional de Chile, el día del golpe mortal.

roísmo y el sacrificio?

Eso mismo: nada.

Al menos, nada con el heroísmo. Porque incluso el caso de Allende abre una discusión legítima. ¿Debía inmolarse? ¿Era lo responsable? A mí siempre me ha parecido un gran ejemplo de entereza, pero hay quienes creen que fue un acto de redención individual junto a cierta irresponsabilidad colectiva. Carlos Altamirano, que en 1973 era secretario general del Partido Socialista, cuenta

que a veces hablaba con Allende sobre su posible muerte. “Salvador (...) ese es un problema estrictamente tuyo, que lo resuelves tú mismo, pero ¿qué pasará entonces con ese tremendo proceso que hemos iniciado y que has dirigido tú, qué pasa con la Unidad Popular, qué pasa con las masas populares que nos apoyan?”. Es decir, el suicidio sería una forma ética, histórica y hasta “heroica” de resolver un problema político, pero no una forma política. José Zalaquett, exmiembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile y defensor de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, dijo que, para él, la forma de morir de Allende “es problemática (...) Por una parte, respeto esa decisión, y por otra, me da la impresión de que tiene un poquito de esto: ‘con permiso, tengo una cita con la eternidad, los dejo aquí, ustedes verán cómo se las arreglan’”.

Ah, qué discusiones. Porque en el caso de Venezuela, la discusión sobre heroísmo es nula. No hay heroísmo cuando utilizas las fuerzas del orden contra tu población civil desarmada, como pasa también en el Perú. ¿Y el sacrificio? Tampoco. ¿Qué sacrifican quienes se mantienen en el poder para no irse presos? El sacrificio (o el heroísmo) están en la dirección contraria, en quienes se ponen en riesgo por una razón etérea pero valiosa.

¿Y por qué traigo esto a colación? Porque pensaba en el Perú, en un comunicado patético de nuestra izquierda —de la que formo parte, aunque no quiera— dando su apoyo a Nicolás Maduro y “al pueblo venezolano”, y denunciando a Washington, el imperialismo, las sanciones y bla bla bla. Y veo también a amigos —los que descubrieron que eran marxistas recién a los 30 años— defender a Maduro y sus elecciones como si fuese un gran problema geopolítico en el magnífico ajedrez del mundo, y no un Alberto Fujimori hecho de harina PAN. Y entonces pienso en los sacrificios, y me pregunto si defender a Nicolás Maduro es para ellos un sacrificio, una inmolación, un acto heroico, y me doy cuenta de que hay “sacrificios” que se hacen de pura necedad, de pura estupidez. ■

**¿DEBÍA INMOLARSE?
¿ERA LO RESPONSABLE?
A MÍ SIEMPRE ME HA
PARECIDO UN GRAN
EJEMPLO DE ENTEREZA**

▶ Estar «bien mal»

«A propósito, ¿qué es del señor Rufino?», pregunta el tío Severiano, dirigiéndose al muchacho sentado a su derecha en el velatorio. Sorprendido, el joven deja de jugar con su teléfono móvil, mira al vacío y responde con tono de fastidio: «Mi abuelo está bien mal, ya desde hace tiempo». Luego se levanta y, sin despedirse, se dirige a la salida. «Medio malcriado resultó el adefesio, ¿no?», comenta el tío, buscando mi aprobación. Y agrega: «Encima habla pésimo. ¡Cómo va a decir “bien mal”! Y eso que está en la universidad».

**Tribunal del
Santo Oficio**



RICARDO VERA LEYVA

En realidad, al contrario de lo que la mayoría cree, la expresión «bien mal» no es incorrecta, pues, en este caso, «bien» funciona como un adverbio ponderativo que, antepuesto al adjetivo «mal» —puede preceder, asimismo, a otros adjetivos y adverbios—, equivale a «muy». Precisamente, en el Diccionario de la Academia, la palabra figura, en séptima acepción, con ese sentido. Ergo, son irreprochables (aunque no elegantes) las siguientes ora-

ciones: «Ana salió del campo bien adolorida»; «Él se encuentra bien enfermo»; «Mi abuelo está bien mal».

Algo similar ocurre con la expresión «harto poco», en apariencia absurda. A decir verdad, si consideramos que «harto» también funciona como un adverbio ponderativo equivalente a «muy», podemos llegar a la conclusión de que estas (extrañas) oraciones son válidas: «Es harto poco probable que llueva»

(«Es muy poco probable que llueva»); «Harto poco duró Francisco Orrego, el hombre de los anteojos azules, quien, suponíamos, estaba al timón de TVN» (elíbero.d, 29/11/2018).

Un sinónimo de «harto» es el poco usado vocablo «asaz», proveniente del occitano «assatz» y este del latín «ad satis». En el Diccionario aparece como adjetivo y como adverbio, con las acepciones de ‘muy’ y ‘mucho’, respectivamente. Se trata de un cultismo empleado, sobre todo, en el lenguaje poético: «Era una mujer asaz discreta, de mirada tierna y alma serena»; «La luna brillaba asaz en la noche callada e iluminaba con su luz la plaza solitaria». ■

Otra vez, las armas



JUAN MANUEL ROBLES

Son tiempos de videos reales alucinantes: todos los días vemos a alguien morir, o caer al vacío de una forma estúpida. Los chistes de humor negro hoy no se cuentan: consisten, por ejemplo, en ver la grabación de un hombre haciéndose el payaso demasiado cerca de una mezcladora de cemento. Y chan, el fin. También hay, todos los días, videos de gente disparando, o recibiendo balazos, o cayendo abatida, gracias a la omnipresencia de las cámaras de seguridad. Estos últimos pueden ser horribles pero son necesarios: se han vuelto parte de la estética de los noticieros de estos tiempos, verlos es requisito para estar informado. Saber de la delincuencia en Lima, por ejemplo, requiere una mirada a esos materiales.

Pues en medio de ese bombardeo, que a veces nos vuelve insensibles, me ha quedado dando vueltas la secuencia difundida la semana pasada, de un conductor que se defiende a balazos de sus asaltantes, en una zona de Miraflores que solía ser tranquila (y ya no lo es).

Estos videos funcionan mejor y se viralizan más cuando hay una moral satisfactoria: los delincuentes que no se esperan la reacción del ciudadano, que se creen que será un hurto fácil y encuentran fuego abierto, que llegan con ánimos de provocar miedo y terminan huyendo despa- voridos. Plot twist para el goce de la audiencia. El video de Miraflores cumple ese libreto: el atacante armado se acerca a la ventana del auto y el conductor, al verlo, se apura en sacar su arma y dispara... ¡A través del vidrio! No le da, pero lo hace huir. A él y a su cómplice (eran dos contra uno). Es una historia de inseguridad ciudadana con final feliz.

Pero no es eso lo que me impacta. He visto antes videos similares. Asaltantes con pistola que terminan humillados. Y casi siempre es porque se metieron con la presa

equivocada: tipos entrenados y duros. Un policía en su día libre. Un militar fuera de servicio. En esos videos, el asaltante paga su cobardía con creces: la furia del hombre entrenado lo condenará a sufrir. Como el recordado caso de Miguel Llanos, luchador de artes marciales

experto en armas de guerra y policía privado en Miami, que para proteger a su novia mató a los atacantes de manera prolija —balazo primero, golpes brutales después— y los arrolló con su vehículo.

Eso suele verse en los videos virales de todo el mundo: la técnica, la



El hombre en Miraflores camina con el revólver empuñado y disparando al azar.



venganza meticulosa e implacable.

Lo que me deja pensando, en este video, es que se trata de un hombre que saca su pistola con la urgencia de quien se protege con aplomo pero también con insensatez. En vez de encender el auto y salir volando luego de dar el primer disparo, abre la puerta para buscar a sus atacantes sin demasiada decisión (colocándose en posición supervulnerable). Camina tambaleándose (me recordó mucho a Fredo, el menos hábil de los Corleone, cuando empuña el arma para defender a su padre). Y dispara cinco veces a cualquier parte (le dio a un auto y pared cercana, pudo terminar mal el asunto).

Entonces entiendo por qué me he quedado pensando tanto en esas imágenes. Porque con ellas echo un vistazo a una nueva era que creí cercana, pero aparentemente ya está entre nosotros. Hablo del momento en que un ciudadano tiene un arma como quien tiene un dispositivo de emergencia más, con un entrenamiento simple que se difumina en

la falta de práctica. El arma usada con la lógica del extinguidor en incendios, con nerviosismo pero sin paltas existenciales.

Digo: el momento terrible en que un arma es usada por un individuo que claramente no se siente cómodo con ella. El hombre de Miraflores estuvo cerca de darles a sus atacantes. Pero no es Miguel Llanos ni lo será nunca. Salvo por el Mercedes Benz —un elemento no menor—, ese tipo se parece más a un ciudadano cualquiera, que debe vivir en una ciudad peligrosa, como lo es Lima hoy más que nunca. Es un hombre que ha tomado ciertas medidas. Verlo es vernos.

He estado por mucho tiempo en contra del armamentismo ciudadano. Siempre he creído que lo único que conseguirá es volver más letal al delincuente (que disparará y matará con más facilidad si aumenta la probabilidad de que su víctima esté armada). Pero siempre he estado atento a algunas voces a favor de la tenencia de armas. Porque así como en el lobby de armas de fuego hay despreciables asesinos de palomas como Rafael Rey, fuera de esos conciliábulos hay personas pro armas lúcidas como Gustavo Gorriti, quien pide rechazar el tabú y considera que tenerlas es un mal necesario que sí puede repeler a

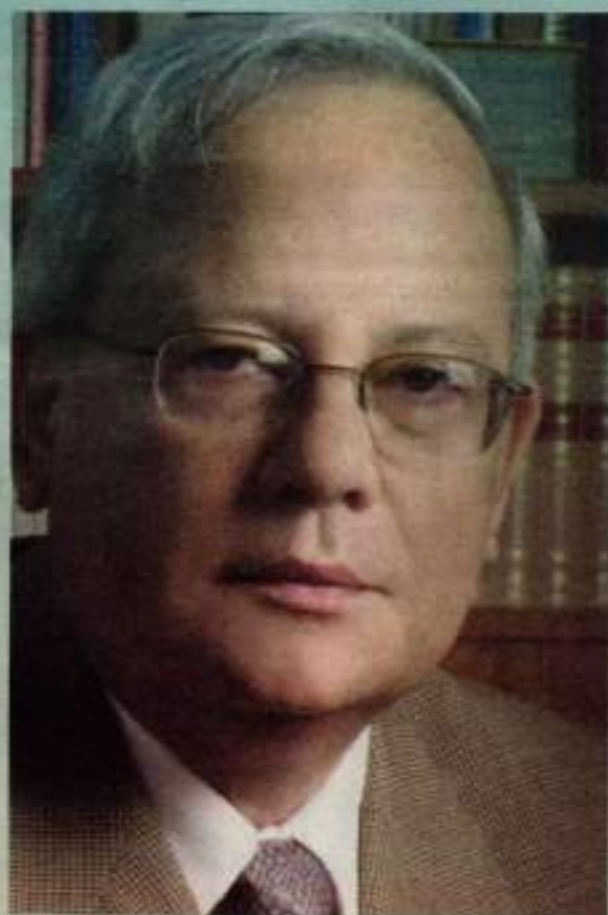
la delincuencia, en lugares donde la policía es corrupta, ineficiente y mal entrenada (como el Perú).

¿Me parece suficiente para estar de acuerdo? No lo sé. Sigo pensando que por cada ciudadano que consiga un arma como medida extrema —sin alucinar con matar delincuentes como en un videojuego disfrutable— hay otro que se compra un arma y, fascinado por su juguete, la dispara estúpidamente en un almuerzo con los compañeros del trabajo. Sigo pensando que entre muchos de los que se arman está el espíritu de Llanos cuando dice: "los delincuentes son demonios, y matar demonios es un camino al cielo". Y me horrorizo al pensar que ahora casi no hay límites legales para la "defensa propia". Pero, la verdad, siento que la discusión tiene cada vez menos sentido. Si la cantidad de muertes violentas por el crimen sigue aumentando, el dilema moral se volverá obsoleto. Es el Perú que nos va tocando. Tener un arma no será algo que hayamos decidido, sino algo que nos pasará. ■

SIGO PENSANDO QUE ENTRE MUCHOS DE LOS QUE SE ARMAN ESTÁ EL ESPÍRITU DE LLANOS CUANDO DICE: "LOS DELINCUENTES SON DEMONIOS, Y MATAR DEMONIOS ES UN CAMINO AL CIELO"

Todos los lunes, antes de las 9 de la noche,
siga en vivo el **Podcast de César Hildebrandt**

Canal de  YouTube
@hildebrandtensustreceOficial



Nuestro canal en  YouTube
llegó esta semana a los
135,616 suscriptores y ha
sumado **12'339,952 vistas**



HILDEBRANDT
en sus trece

¡AHORA CON ENTREVISTAS EN VIVO!



JENNIE DADOR TOZZINI

PLATA DE LA UNIÓN EUROPEA DETRÁS DE 'PARO' COMUNISTA

UE Y USAID FINANCIAN MARCHAS EN PERÚ, MEDIANTE ONG COORDINADORA DE DDHH

El pasado 18 de julio el programa "Combusters" acusó a la defensora de derechos humanos Jennie Dador de financiar marchas contra el gobierno de Dina Boluarte gracias a fondos del extranjero. Una auténtica calumnia.



CU4TRO D

IPYS DEFIENDE A WILLAX

Al día siguiente del comunicado de IPYS Mirko Lauer, director de la ONG, y Augusto Álvarez Rodrich, presidente, ratificaron su apoyo a Willax en el podcast Cuatro D.

Chalecos de prensa

►IPYS, la otrora ONG dedicada a sacar la cara por el periodismo asediado, apuesta hoy por los derechos de Willax a seguir difamando

RICARDO VELAZCO

A Willax, el canal de las difamaciones con ventilador, le ha salido un escudero a la medida: el Instituto Peruano de Prensa y Sociedad (IPYS). El pasado 25 de agosto IPYS, comandado por Augusto Álvarez Rodrich, su presidente, y Ricardo Uceda, director ejecutivo, protestó enérgicamente por la decisión del Ministerio Público de iniciar "indagaciones previas" contra el canal de Erasmo Wong y el diario "Expre-

so". La investigación es por la campaña mediática que ambos medios orquestaron contra la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Jennie Dador.

El juego en pared empezó el día 18 de julio con un informe en el diario "Expresso". El periódico publicó una "nota" en la que acusaba a Jennie Dador Tozzini y a la CNDDHH de financiar "paros" en el Perú con dinero de la Unión Europea.

"La Unión Europea es uno de nuestros donantes históricos, pero actualmente no tenemos ningún proyecto con

ellos y mucho menos estamos financiando marchas. El día de la publicación yo había invitado a una movilización contra el gobierno de Dina Boluarte. Eso es parte de la agenda de derechos humanos", dice Dador.

La abogada señala que el reporte de "Expresso" coincidió con el intento del Congreso de aprobar una ley para fiscalizar a las ONG. De hecho, el diario incluyó declaraciones del congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, uno de los promotores del proyecto. "Estamos viendo que se usan las donaciones para acciones que mu-

ocio de las ONG
con financiamiento extranjero
motociclistas violentas
justifican la violencia de los suyos culpando a las Fuerzas del Orden
padronan a los muertos
nuevan los casos a las Cortes Internacionales
bran un porcentaje de las indemnizaciones



Post que publicó el líder de "La Resistencia" Juan José Muñico en su cuenta de "X" contra Jennie Dador.

chas veces desestabilizan las políticas de Estado", señaló Aguinaga.

Ese mismo día el programa "Combusters", de Willax, replicó la publicación del diario y para darle fuelle al montaje entrevistó a Aguinaga.

Al día siguiente, el 19 de julio, el líder de "La Resistencia", Juan Muñico, se unió al cargamontón. Muñico, más conocido como "Jota Maelo", publicó una imagen de Dador con sangre en el rostro y la acusó de haber implementado un "negocio" que incluía "financiamiento extranjero, marchas violentas, muertos y el cobro de un porcentaje de las indemnizaciones".

Tras la arremetida, el Ministerio de Justicia activó el protocolo de protección a defensores de derechos humanos. El pasado 9 de agosto el Minjus presentó una denuncia contra Willax, "Expreso" y "La Resistencia" por "actos de intimidación y difamación".

Dos semanas después el IPYS lanzó un comunicado señalando que la Fiscalía buscaba "sancionar opiniones, que pueden o no estar funda-

mentadas, pero que deben ser toleradas cuando van dirigidas a personas que participan del debate público".

El 26 de agosto Álvarez Rodrich y el periodista Mirko Lauer, otro de los directores de la ONG, participaron de un podcast donde justificaron el comunicado y la defensa de Willax.

"El IPYS tiene una tradición de defender principios antes que medios y acá tiene que ver con las demandas judiciales que se presentan contra periodistas. Esto es bien importante porque genera recelos de algunos sectores que están más comprometidos con un periodismo activista, donde se toma partido por un lado y se defiende como una guerra de quienes son los buenos y los malos y alrededor de eso se agrupan todas las ideas", pontificó Álvarez Rodrich.

Lauer añadió: "Aquí ha comenzado la práctica de amedrentar a los medios. ¿A qué medios? A todos los medios, porque uno amedrenta a Willax porque no le gusta la derecha, pero también puede amedrentar a "La República"

porque no le gustan los restos del castillismo y atribuírselos. 'IPYS defiende a Willax' es 'IPYS defiende a la libertad de prensa en cualquiera de sus manifestaciones y expresiones'. Esa argumentación sitúa a la calumnia, la difamación y la injuria a la altura del derecho de opinar libremente. Es la izquierda teñida de orteguismo.

Lauer también indicó que el escenario para atacar a la prensa había tenido como antesala "un sólido medio año de ataques a Gustavo Gorriti y al Instituto de Defensa Legal", pero omitió decir que IDL ha sido sistemáticamente víctima de Wong y sus jornaleros.

En el comunicado del 25 de agosto IPYS también criticó la investigación fiscal al conductor de Willax Augusto Thorndike por haber publicado los movimientos bancarios

dan Uceda y Álvarez Rodrich defiende los intereses de Erasmo Wong y su tropa.

El 9 de julio del 2021 el IPYS acusó al entonces presidente electo Pedro Castillo de intimidar a Willax y al conductor Beto Ortiz. En esa época el golpista expresidente había enviado una carta al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) solicitando una investigación administrativa contra el medio por haber desplegado "campañas difamatorias" en su contra sin otorgarle el derecho a réplica. IPYS defendió al medio sin referirse a sus métodos y excesos. En ese momento, como es notorio, se trataba de impedir que Castillo llegara a juramentar.

"La posición de IPYS es indefendible. El proceso de la Fiscalía se ajusta al derecho y a la jurisprudencia de la Corte In-

IPYS y otros miembros del directorio decidieron la salida del sociólogo Samuel Rotta de la dirección ejecutiva de Proética, una ONG pensada para combatir la corrupción y el autoritarismo. Rotta había sostenido una dura oposición contra el régimen de Dina Boluarte.

Al igual que Albán, Grados también pone bajo la lupa los quehaceres periodístico de Uceda. En enero de este año el periodista defendió en "El Comercio" a Tamshi, una empresa con denuncias por tala ilegal y tráfico de madera. Meses después Uceda participó en un foro de Idea Internacional donde señaló que existía un "periodismo ambiental muy ideologizado que va a encontrar probablemente un montón de inversiones que están mal".



El 19 de agosto la Fiscalía especializada en Derechos Humanos decidió indagar si Willax, el diario "Expreso" y el líder de "La Resistencia" Juan José Muñico intimidaron y difamaron a Dador. Se trata de una indagación preliminar.



Carlos Rivera, abogado del IDL: "Denunciamos a Willax porque accedieron a una correspondencia cerrada que estaba dirigida al IDL y publicaron hechos que no tenían ninguna relevancia pública".

del IDL.

"El BBVA nos enviaba un reporte de nuestros movimientos bancarios en un sobre cerrado. En marzo enviaron ese reporte a una dirección antigua que apareció en las manos de Willax. Lo que hicieron fue abrir una correspondencia dirigida al IDL y lo que publicaron fue un adelanto de sueldo a Glatzer Tuesta y una rendición de unas actividades. No hay hechos de notoria relevancia o indicios de un delito que puedan justificar el interés público. Por eso los denunciamos. No me sorprende el comunicado de apoyo de IPYS a Willax, conociendo quiénes lo dirigen", dice el abogado Carlos Rivera.

Esta no es la primera vez que el "instituto" que coman-

teramericana de Derechos Humanos", señala García Sayán, representante de la Comisión Andina de Juristas, en relación al caso del IDL.

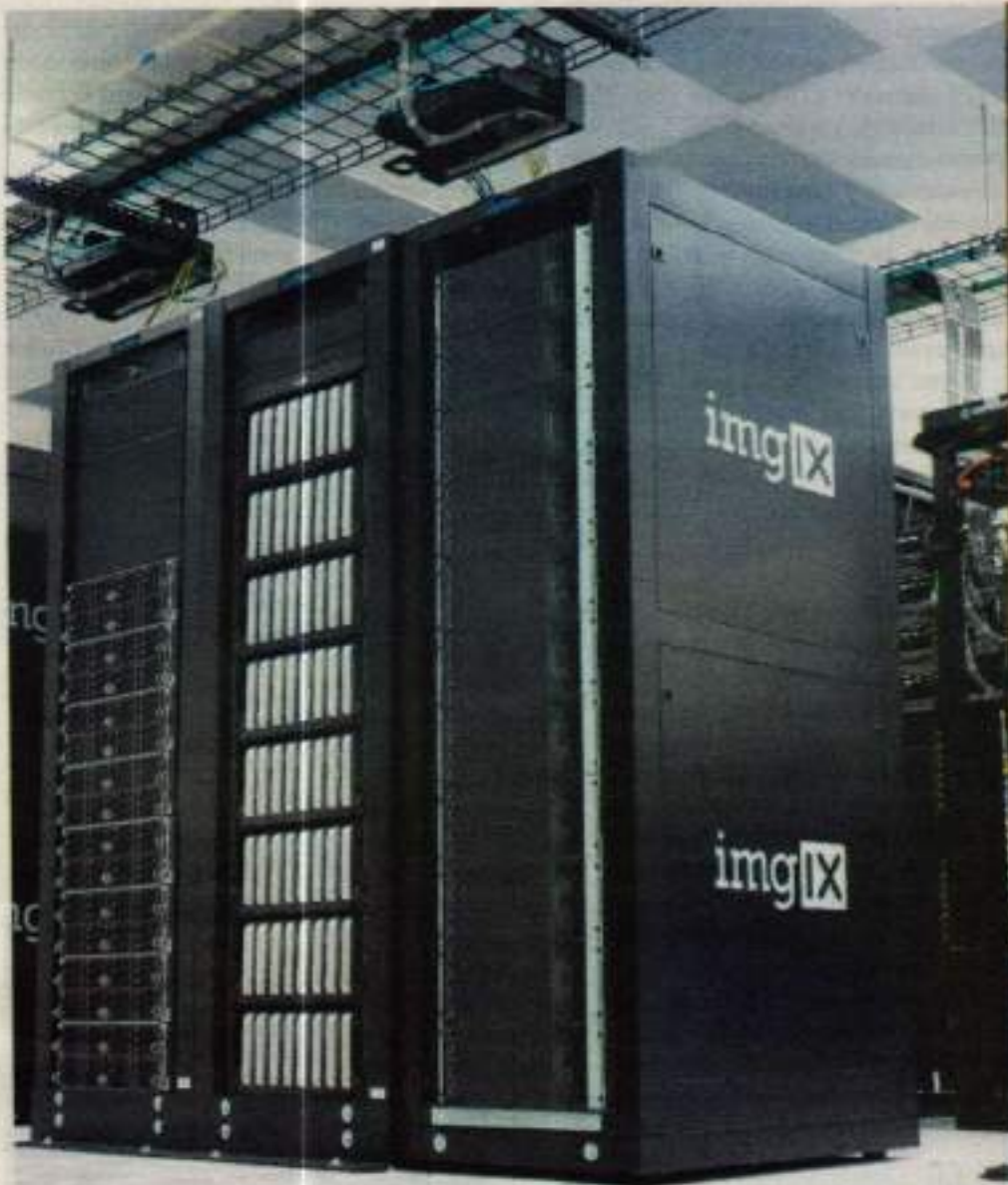
El exministro del Interior Walter Albán añade: "Mantengo diferencias de opinión con Uceda, pues sus columnas publicadas en 'El Comercio' y 'La República' me generan dudas acerca de su compromiso con la lucha contra la corrupción".

Tanto García Sayán como Albán han compartido asiento con Álvarez Rodrich y Uceda en el consejo directivo de Proética, una ONG que agrupa a organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro. En la lista está IPYS.

La periodista Laura Grados reveló que en mayo pasado

Uceda se ha convertido en escudero de Patricia Benavides y llegó a sostener en sus columnas que la acusación fiscal contra Keiko Fujimori se presentó "para afectar su candidatura".

También tiene en su agenda (periodística) al equipo de fiscales del caso Lava Jato, postura que comparte con su colega Augusto Álvarez Rodrich. "El fiscal Vela ya hace tiempo que se anda pasando de la raya y anda metiendo prisiones preventivas, embargos, tirando investigaciones que meten a 150 personas, para ver quién delata, para ir donde los procesados y decirles si dices lo que quiero, te libero", señaló esta semana Álvarez Rodrich durante su discurso en defensa de Willax. ■



La compra del PJ es parte de un proyecto mayor de USD 200 millones del BID con el Estado peruano.



Javier Arévalo: ha sido alertado de que la licitación de S/ 47 millones para comprar servidores para el PJ huele mal.

Sospechas legítimas

► A pesar de las observaciones de la Contraloría el Poder Judicial parece empeñado en favorecer a una determinada empresa en la compra de servidores y puesta en marcha de un data center destinado a los juzgados penales

FLOY MARCHÁN

En el Poder Judicial se cocina un faenón de S/ 47 millones con la compra de servidores y un data center para los juzgados penales de todo el país. La licitación está plagada de irregularidades que van desde la triplicación del presupuesto original y el direccionamiento hacia una marca hasta el cambio a última hora del comité seleccionador.

Ya hay dos informes de la Contraloría señalando graves irregularidades en la millonaria licitación. El presidente del

PJ, Javier Arévalo, ha sido advertido por la Contraloría, pero se ha hecho el desentendido. Dentro de dos semanas se entregará la buena pro al consorcio ganador y nadie en el PJ parece interesado en detener el tremendo negociado.

La historia de la licitación para dotar al PJ de nuevos servidores comenzó en diciembre del 2019, cuando el BID dio luz verde a un préstamo al Estado peruano para financiar la modernización del sistema penal del país. El proyecto, bautizado como "Eje Penal" y estimado en USD 200 millones, contempla prestar dinero al Poder Judi-

cial, Ministerio de Justicia y Fiscalía.

Bajo la modalidad de contrapartida, cada una de las partes, Estado y BID, aporta USD 100 millones al proyecto. La plata tiene como fin comprar computadoras, impresoras, tabletas, servidores y nuevas centrales de almacenamiento de datos, con conexión entre las tres instituciones. Cada organismo es responsable de llevar adelante su propia licitación. El proyecto ha estado envuelto en varias polémicas.

En diciembre pasado el colaborador eficaz Jaime Villanueva contó que la ex

Fiscal de la Nación Patricia Benavides había acordado con el empresario Giancarlo Valer Enciso una "recompensa" de S/ 1 millón si entregaba a la compañía Italtel Perú la licitación del nuevo data center para el Ministerio Público, valorizado en USD 46.8 millones.

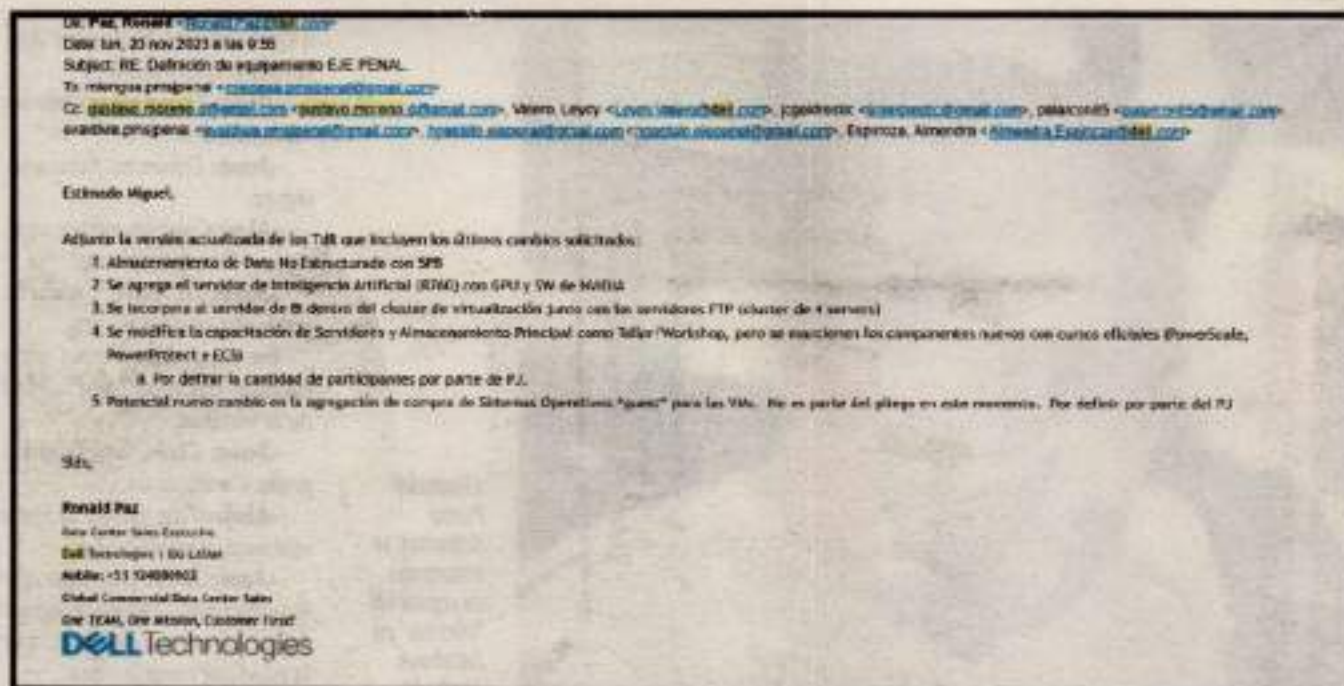
El contrato no se firmó por dos motivos: el estallido del escándalo por las revelaciones de Villanueva y debido a que el BID no aprobó el desembolso al encontrar irregularidades en el comité seleccionador.

Italtel Perú sí se hizo de la licitación del data center del Ministerio de Justicia, presu-

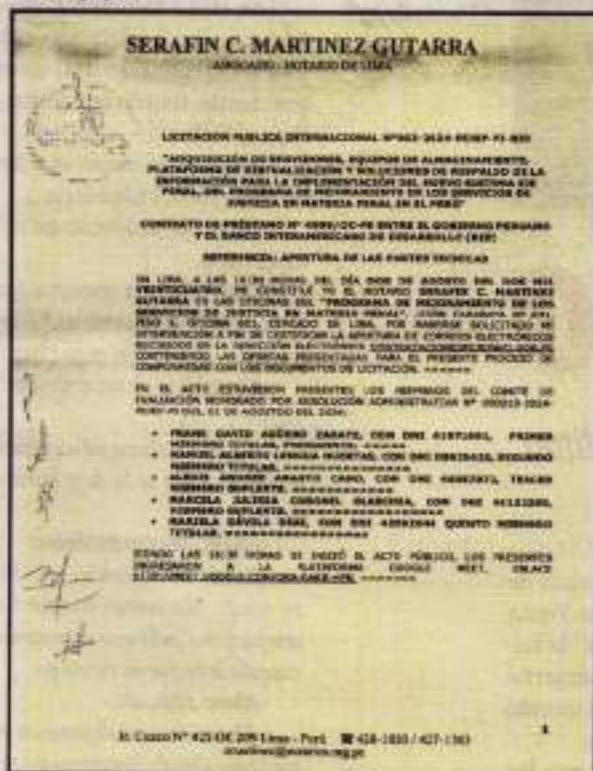
puestado en S/ 8.4 millones.

La polémica se expandió al PJ. El precio de los servidores se triplicó en dos años. En mayo del 2022, con Elvia Barrios como presidenta del PJ, se valorizó el nuevo data center en S/ 16.5 millones. En diciembre del 2023, con Javier Arévalo, el presupuesto subió a S/ 26 millones. Y en enero de este 2024 ascendió nuevamente a S/ 47.2 millones.

Al último presupuesto se llegó después de un "estudio de mercado" hecho en abril último en el que participaron las tres empresas que ahora aspiran a hacerse con el contrato: "J Evans y Asociados



Correo de Ronald Paz, ejecutivo de Dell, del 20 de noviembre del 2023, coordinando con funcionarios del PJ los términos de referencia para la compra de los equipos.



Acta notarial del último 2 de agosto con los nombres del nuevo comité seleccionador de la licitación. Es el cuarto comité en lo que va del proceso.



Resolución del presidente del PJ, Javier Arévalo, del 3 de mayo último. Reconoce informe de la Contraloría con irregularidades detectadas, pero solo traslada el reporte a su gerente general.



Página 18 del informe de la Contraloría de abril último señalando que no hay razones "técnicas ni objetivas" para que el PJ haya decidido que su nuevo data center y servidores sean marca Dell.

SAC", "3G IT Consulting SAC" e "IntegrIT SAC".

El concurso llamó la atención de la Contraloría. El órgano de control ha elaborado dos informes «uno en abril y otro en mayo», donde se detectó 8 irregularidades de carácter técnico, financiero y legal.

Entre las observaciones está el incumplimiento de los plazos para las licitaciones: el hecho de que la oficina que lleva adelante el proyecto no esté dentro del organigrama del PJ y que no se tenga un plan seguro para la transferencia de los datos entre servidores.

Sobre la compra del servidor, piedra angular del proyecto de modernización del sistema penal en el PJ, la Contraloría pregunta: ¿Por qué

se han cerrado en que el nuevo data center debe ser marca Dell?

«Hay insuficientes criterios técnicos y objetivos que sustenten la estandarización de servidores y switches de la marca Dell EMC del Poder Judicial (...) lo que podría afectar la economía, igualdad de trato, competencia efectiva y justa contratación», dice el informe de la Contraloría, firmado por los auditores Leoncio Rodríguez Manyari, Patricia Salas Chacón y Fernando Velásquez Velásquez.

Como en la Contraloría consideran que el caso es grave, el 30 de abril los comisionados enviaron su informe a Javier Arévalo y le pidieron «tomar las medidas correctivas». ¿Qué ha hecho Arévalo hasta ahora?

Patear la pelota a la Gerencia General.

El gerente general del PJ, Jaime Gómez Valverde, sigue en su puesto. Y lo mismo ocurre con el gerente de Informática, Freddy Aramburú García. Ambos son, según fuentes, cercanos a Arévalo, al punto que fueron los primeros funcionarios que nombró apenas asumió la presidencia del PJ.

Hernán Berrospi Durand, coordinador de Proyecto de PJ, y Erik Saldaña Solari, director del «Eje Penal», son los otros funcionarios vinculados a la licitación. Ambos también siguen en sus puestos.

Este semanario accedió a correos en los que ejecutivos penales de la empresa norteamericana DELL coordinan con

funcionarios del Poder Judicial los detalles de las bases de la licitación del data center. Los mensajes son de noviembre del año pasado, antes de que comenzara la licitación y se hiciera el «estudio de mercado» que disparó el presupuesto de 1,6 a \$/ 47 millones.

Uno de los correos es del 14 de noviembre y fue enviado por Ronald Paz, ejecutivo de Dell, a Miguel Lengua y Gustavo Moreno, coordinadores del proyecto «Eje Penal». En ese texto se señala la «definición de equipamiento». En otro correo, del 20 de noviembre, el mismo ejecutivo de Dell entrega la «versión actualizada de los TdR». Los «TdR» son los «Términos de Referencia», que en el lenguaje de los burócratas

se refiere a las bases para una licitación o contratación pública.

Hay una sospecha adicional en la millonaria compra de servidores que está haciendo la gestión Arévalo. El comité seleccionador ha sido cambiado cuatro veces desde que empezó el proceso. El 26 de marzo último se designó a un primer comité conformado por cinco personas. El 15 de mayo se nombró al segundo comité. El 6 de junio, siete días antes de la convocatoria para recibir propuestas, se escogió al tercer comité presidido por Frank Agüero Zárate.

El 1 de agosto, un día antes de que se abriera el primer sobre con las propuestas técnicas de los postulantes, se nombró al cuarto comité. En este equipo Miguel Lengua Huertas entró

como miembro titular y se incluyó a Alexis Abanto Cano como tercer suplente.

Cuando, en presencia del notario Serafin Martínez Gutarra, se abrieron los tres sobres que habían llegado, los nombres de los postulantes eran viejos conocidos: J Evans y Asociados SAC, 3G IT Consulting SAC e IntegrIT SAC, las mismas empresas con las que el PJ hizo el estudio de mercado. Las tres también son representantes en el Perú de la marca Dell, según la web de la compañía norteamericana.

Dentro de dos semanas se abrirán los sobres definitivos con las propuestas económicas. La fecha exacta depende del visto bueno del BID. ■



Alexander Puma Iltuana: se encargaba de captar los "clientes" en Facebook. Usaba la identidad falsa de "José Alberto Reyes".

Monstruos en Cusco

► Una banda de pedófilos se comunicaba en un chat llamado "Citas Quilla". La víctima recurrente era una niña de 12 años prostituida por su propio padre

ALONSO ZAMBRANO

-José: Inbox. Hay chibolita vacante, solo una.

-Efraín: ¿Número?

-Junior: Te hablo al inbox...

La conversación es de una pandilla de pedófilos que se comunicaban por Facebook en un chat llamado: "Citas Quilla". Los tres sujetos residían en Quillabamba, en la provincia de La Convención (Cusco). La banda de depredadores la encabezaba el padre de una adolescente de 12 años que prostituía a su propia hija.

El pasado viernes 28 de junio, en el hospedaje "Nueva Luz", los agentes de la División de Investigación Criminal detuvieron a A.D.M. (41), el padre de la menor. En el operativo cayó también Alexander Puma Iltuana (38).

A.D.M. había llevado a su hija —a quien llamaremos "Jimena"— desde el centro poblado de Kiteni, a cuatro horas de La Convención, para prostituirla por 500 soles.

El encargado de conseguir a los "clientes" era Puma. Para la ocasión había coordinado con

cinco sujetos que pagarían 100 soles por cabeza.

Puma se identificaba en Facebook con una identidad falsa: "José Alberto Reyes".

El 11 de julio A.D.M. y Alexander Puma recibieron 9 meses de prisión preventiva. Fueron reclusos en el penal de Quillabamba. El caso generó gran conmoción en la ciudad imperial, aun cuando las denuncias por agresiones sexuales contra menores se han vuelto habituales en las comisarias de la región.

"En La Convención son recurrentes las denuncias por violaciones a menores. Es un tema repetitivo y que lamentablemente se ha normalizado", dice la periodista Nohemí Esquivel, del canal CTC de Cusco.

HISTORIA DE UN ABUSO

La primera vez que Alexander Puma abusó de "Jimena" la pequeña tenía 8 años.

La menor ayudaba a su madre en el puesto de frutas que regentaba en un mercado local. Puma tenía un puesto de carne situado frente al negocio de la

madre de "Jimena".

El 11 de diciembre del 2020, a las 7 de la noche, "Jimena" salió de casa para cumplir un recado. Su madre empezó a preocuparse porque la pequeña tardaba más de lo previsto y salió a buscarla. Encontró a la niña en una losa deportiva del barrio con el carnicero Alexander Puma, quien estaba manoseándola. La madre denunció al sujeto al día siguiente en la comisaría de La Convención por abusar de una menor.

La Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva contra el sujeto por "tocamientos libidinosos en agravio de menores". Pero el juez Miguel Ángel Arizabal Allaga consideró que no era un delito lo suficientemente grave y dictó contra el carnicero comparecencia restringida y el pago de una caución de S/ 2,000.

Tras salir en libertad, Puma volvió a las andadas aprovechando el anonimato de las redes sociales.

Creó un grupo de Facebook llamado "Citas Quilla" en donde ofrecía encuentros sexuales con menores de edad.

Las primeras pesquisas de la Policía apuntan a que Puma y el padre de "Jimena" la habrían explotado sexualmente en reiteradas ocasiones usando la página de Facebook.

En el celular de Puma los agentes de la Divincri de La Convención accedieron a conversaciones de WhatsApp y Facebook donde el proxeneta hace coordinaciones con "clientes".

En uno de los chats Puma —usando el nombre "José"— le dice a un cliente identificado como "Alex" que el padre de "Jimena" trasladaría a la menor desde el centro poblado de Kiteni hasta un hotel siempre y cuando le aseguren cinco clientes.

-Alex: Bro, yo me apunto seriamente.

-José: Listo, man. Se trata de la "Jimena". ¿Recuerdas?

-Alex: Sí, Cuma. Entonces, ¿cómo hago? No te entiendo.

-José: Detrás de eso está su papá. Y ya hablé con él. Hemos acordado para mañana. Viven en Kiteni.

-Alex: Vale, muy bien.

-José: Va a subir mañana

a Quillabamba. Y pues me dijo: 'consigue cinco machos'.

-Alex: Ya, yo me apunto seriamente, bro.

-José: Entonces, falta uno, seguro.

-Alex: Completamente seguro, bro. De manera seria.

-José: Ya, mano. Entonces, no divulgues a nadie, bro.

En otro chat Puma pide clientes "discretos", por la edad de la víctima.

-José: Cholo, está faltando gente. Consigue uno.

-Alex: Vale, pasaré la voz a mis patas y jalaré a uno.

-José: Antes percátate que sean discretos. Cuidado te cogen. Sabes que es muy delicado... por la edad que tiene la nena.

-Alex: A todos mis patas les he dicho que la flaca tiene 17 años.

Los chats también muestran que el padre de la pequeña y su socio cobraban 100 soles por cliente, monto que se dividían al 50%.

-José: Listo, mano, el trato es con su viejo. Ya hablé ya.

-Alex: Como acordamos entonces, bro.

-José: Mañana apenas salga de la escuela van a venir a Quillabamba. Como te dije, es de Kiteni.

-Alex: Vale, de acuerdo. Pero ¿sobre el costo?

-José: Ya ahora mi comisión es 50. Y a ella te lo dejo barato nomás.

-Alex: De cuánto, bro.

-José: 100. Habla, bro. No es estafa. No vamos a estar todos juntos. Cada uno se hospeda cuando le toque su turno ps.

-Alex: Ahh, ok.

-Alex: Claro, si digamos a mí me toca a las 6. Entonces yo me hospedo a esa hora. A las 7 de toca a ti. He pedido cinco puntas.

Interrogado por la Policía, el padre de "Jimena" optó por guardar silencio.

Un detalle que llamó la atención durante las investigaciones es que en las conversaciones de WhatsApp Puma llamaba "suegrito" al padre de la pequeña.

-José: Suegrito, un favor...

-Alberto: ¿Cuántos chicos hay?

-José: Cinco. Eso nomás.

Según cifras del programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del año más de 11 mil niños y adolescentes han reportado ser víctimas de abuso. El 93,6% de los casos son mujeres. Las regiones con mayor incidencia son Lima Metropolitana, con 4,672 denuncias, Arequipa (1,353) y Cusco, que bordea el millar. ■



*Las columnas más
leídas están en*

HILDEBRANDT *en sus trece*

*Cada semana, textos que nos
ayudan a saber de qué se trata*

Cupos en el feudo de Porky

► Hay fiscalizadores municipales que en vez de sancionar plantean el soborno como "solución". Aquí presentamos un caso respaldado por un audio

JULIO ROSPIGLIOSI

En la municipalidad que dirige Rafael López Aliaga estarían sucediendo cosas raras. Una serie de mensajes de WhatsApp y audios confirman lo que es un secreto a voces entre algunos empresarios: habría fiscalizadores que cobran cupos a cambio de no imponer sanciones.

Luis Saldaña Quijate (36), dueño de un pequeño hostel en el Cercado de Lima, asegura haber sido víctima de esta trama.

Hace unos meses Saldaña denunció ante la Gerencia de Fiscalización haber sido extorsionado por un funcionario de la comuna. Pero lo que siguió no fue una investigación interna por corrupción sino dos operativos que terminaron con la clausura de su local.

Saldaña nos atiende por

teléfono. Tiene miedo de eventuales represalias. Acusa al fiscalizador José Márquez Espinoza (64) de pedirle "una bolsa" de dinero. "El señor Márquez venía todos los meses a cobrar una bolsa de 300 soles. Decía que todos los hoteles de la zona le pagaban para que no los clausuren, que esa bolsa no era para él sino para los gerentes de la municipalidad", cuenta.

Saldaña grabó una de estas conversaciones con Márquez, que tuvo lugar en diciembre pasado. En el diálogo Saldaña admite que su local ha incumplido algunas normas de seguridad. Y el funcionario le responde que si no "apoquina", será multado.

-Márquez: Ya están vencidos. Tiene dos extintores vencidos.

-Saldaña: ¿Y no se puede subsanar?

-Márquez: Si su descargo está bien sustentado, lo archi-



Luis Saldaña denunció la extorsión de un fiscalizador pero la municipalidad terminó clausurándole el local.



El hostel situado en la cuadra dos de Teodoro Cárdenas.

van. Pero en este caso, con la foto que yo tomo, no va a proceder. (...)

La conversación escala hasta que Márquez se anima a pedirle dinero.

-Márquez: Tú quieres que yo te ayude. Dime, pues. Tú quieres que yo te dé la mano. Somos tres personas, sé consciente. La multa es de 1,300 y pico. Yo no te voy a pedir los 1,300. Ya, 300 para cada uno.

-Saldaña: ¿Cuánto?

-Márquez: 300.

Saldaña asegura que se negó a pagar y que denunció la extorsión. Contactó a Roberto Capcha Mendoza, encargado del Servicio de Ejecución y Coordinación de Actividades de Campo, y a Freddy Quiroz Flores, el mismísimo gerente de Fiscalización y Control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, un puesto de confianza de López Aliaga. Y les envió a los dos funcionarios los mensajes -vía WhatsApp- con los audios que revelaban el cobro de cupos.

Saldaña muestra los mensajes a los dos funcionarios. Freddy Quiroz alega que no abrió el mensaje.

"A mí me escribe mucha gente. Por el trabajo que ha-

remos, en el que hay problemas de cupos, de delincuencia, a nosotros nos amenazan, así que preferiblemente no abrimos mensajes o no contestamos llamadas de personas que no conocemos. Por precaución, no por ocultar algo", se defiende Quiroz.

José Márquez siguió trabajando como fiscalizador en la municipalidad.

ENCUBRIDORES

En febrero el hostel de Saldaña, tras ser inspeccionado, fue clausurado temporalmente por infringir normas de salubridad.

Saldaña sintió que era una represalia, así que fue a la base de la Gerencia de Fiscalización, en la cuadra uno del jirón Caylloma. Allí algunos colegas de Márquez se ofrecieron ayudarlo a reabrir el negocio a cambio de que no hiciera públicas las pruebas del cobro de cupos. Saldaña también grabó una conversación con un funcionario que identifica como Juan Neuhaus.

-Neuhaus: Yo lo hago para ayudarte. Tú quieres abrir porque la otra semana ya es Día de los Enamorados.

-Saldaña: Yo voy a subsanar todo.

-Neuhaus: Con esto sí vas a abrir. No va a haber una denuncia (contra Márquez) sino una llamadita de atención.

Otro colega de Márquez que se identificó como el "jefe legal" de los fiscalizadores se ofreció a ayudar a Saldaña a cambio de proteger a Márquez.

-Vallejos: Yo le rogaría, si es que (Márquez) regresa a su establecimiento, fírmelo y bótelos, ya no lo atiende. Y lo vamos a ayudar para que levante la clausura que tiene usted.

-Saldaña: Ya, entonces voy a eliminar los medios probatorios que tengo. Para que esto no trascienda. Yo lo que quiero es trabajar.

-Vallejos: Sí, elimínalo, elimínalo (...). Más bien, bloquéalo a ese tipo, yo voy a hablar con él.

-Saldaña: ¿Cómo se llama ese señor?

-Vallejos: No te voy a decir el nombre por una cuestión de ética, es un compañero de trabajo.

Saldaña terminó levantando la clausura de su local "por el conducto regular". Pero su negocio siguió siendo objetivo de los fiscalizadores. La noche del 13 de junio realizaron un

Pendograma solución anterior N°697





El 20 de diciembre del 2023 las cámaras del hostel de Luis Saldaña grabaron una inspección que hizo José Márquez al local. Ese día se produjo la conversación en la que le pidió 300 soles para cada uno de los fiscalizadores que habían acudido al inmueble.

WhatsApp chat interface showing a conversation with a contact named "Luis Saldaña". The contact's phone number is +51 859 29... The chat includes a video player with a play button and a list of audio messages. The messages are as follows:

- AUDIO 20240704-WA008 9:32 p.m.
- AUDIO 20240704-WA008 9:32 p.m.
- AUDIO 20240704-WA008 9:32 p.m.
- el primer video 9:35 p.m.
- se agrió la barrida 9:35 p.m.
- y en los audios 9:35 p.m.
- los audios por separado en mejor 9:35 p.m.
- hola 9:36 p.m.



Roberto Capcha Mendoza, encargado del Servicio de Ejecución y Coordinación de Actividades de Campo. Le habían llegado los audios que probaban el cobro de cupos, pero no hizo nada.

ACTA DE FISCALIZACIÓN

En la ciudad de Lima, ciudad de la República del Perú, a los 13 días del mes de junio del año 2024, el fiscalizador municipal...

CONCLUSIONES, COMPROMISOS Y OBSERVACIONES

Por lo tanto se recomienda...

RECUPERACIÓN DEL ACTA

FISCALIZADOR MUNICIPAL: DREIN

ADMINISTRADOR: DREIN

SEGUIMIENTO DE SEGUIMIENTO DEL ACTA

No se debe recibir el Acta ☐ Recibido el Acta y se registró a firmarlo ☐

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE CAMPO

Acta de fiscalización del 13 de junio pasado que acusa al local de Luis Saldaña por "ampliación de giro", instalaciones insalubres y por haber encontrado a dos personas del mismo sexo teniendo relaciones sexuales, "lo que atenta contra la moral".

Mensaje enviado por Saldaña a Quiroz, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, denunciando el cobro de cupos. Saldaña dice que fue en febrero pasado. Quiroz aduce que a su celular "llegan muchos mensajes" y que no atiende números desconocidos.

operativo encubierto al hostel en el que -de acuerdo a Saldaña- participó Márquez.

Según el acta, encontraron colchones sucios, condones en una mesa y un pasillo y dos personas del mismo sexo teniendo relaciones en una habitación, lo que -dice el documento- "atenta contra la moral". También acusaron a Saldaña de tener un pub dentro del inmueble que

funcionaba sin el permiso correspondiente.

El microempresario sostiene que nada de eso es cierto, que las cámaras de vigilancia desmienten esa descripción y que se ensañaron con el local porque muchos de sus clientes son homosexuales.

Saldaña grabó el operativo. En el audio se escucha cuando le increpa al funcionario Roberto Capcha por no haber

hecho nada con la denuncia de extorsión.

-Saldaña: Cuando me extorsionaron por primera vez, yo le dejé indicado que había personal de fiscalización que me solicitaba dinero, que me extorsionaba.

-Capcha: No me acuerdo que me dijo eso.

-Saldaña: Lo tengo grabado y usted me dijo: 'mándame por WhatsApp el video'. Yo tengo los pantallazos.

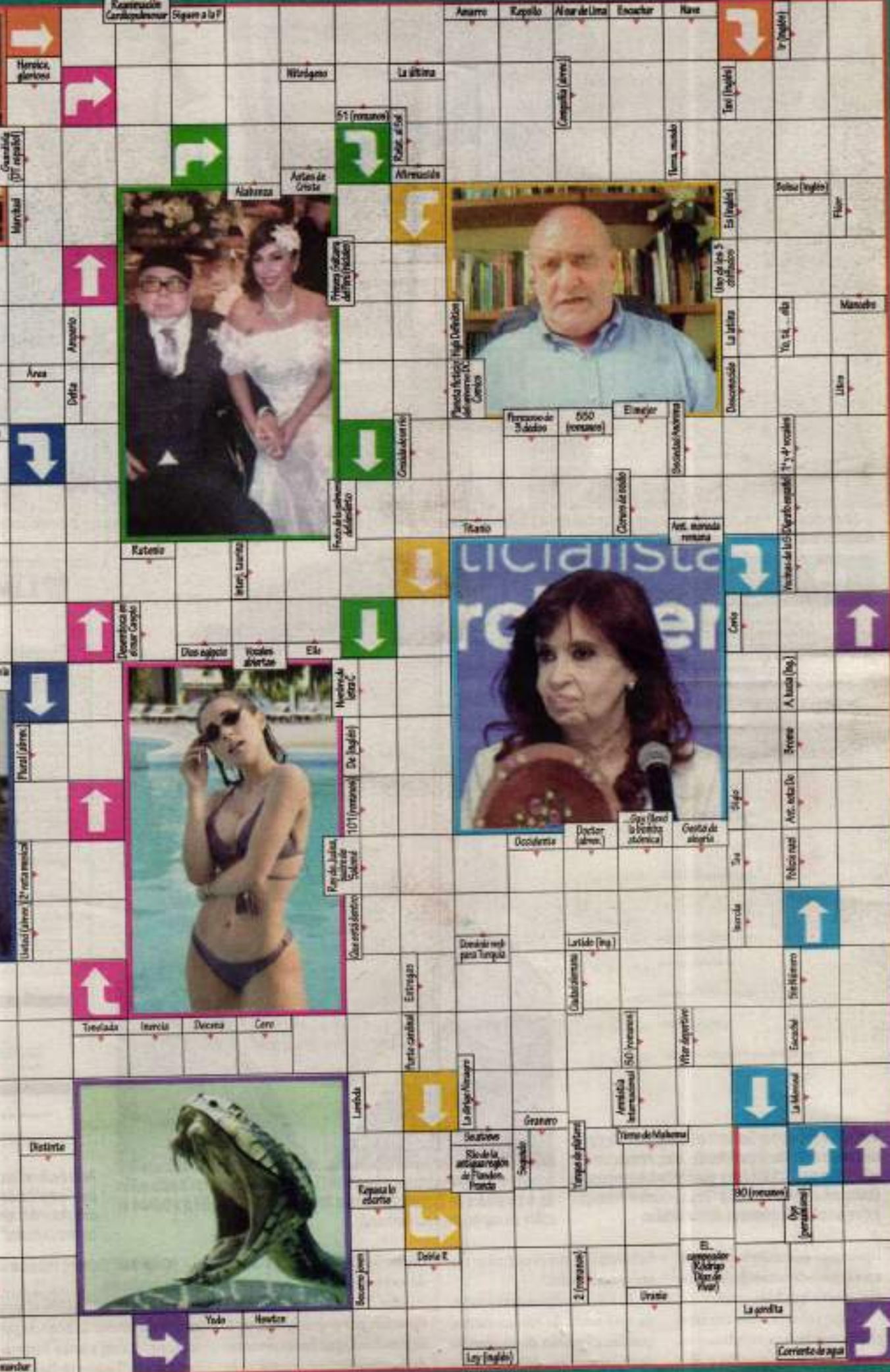
-Capcha: Y apures, mándame los pantallazos.

Tras la fiscalización el municipio le revocó la licencia por incumplir con varias normas sanitarias. "Lo que se ha hecho es violentar la ley de procedimiento de acto administrativo. Además, hemos pedido acceso a información y se nos ha denegado. El derecho a la defensa ha sido vulnerado. Esto ha sido totalmente anor-

mal e ilícito", dice el abogado de Saldaña, Andrés Ochoa.

En la comuna defienden la legalidad del cierre, pero el dueño del hostel no cree en las coincidencias. "En este caso hay un contexto. Primero, yo denuncié con pruebas la extorsión; luego, ellos lo toman como una afrenta; y, finalmente, deciden matar al mensajero. Esa es la lectura", se queja.

PENDEGRAMA es un juego pendenciero. No se trata de recordar ciudades ni autores, ni de reconocer celebridades. Se trata de imaginar la palabra o la frase cachacienta que debería corresponder a cada imagen y, en algunos casos, a un par de imágenes vinculadas por alguna razón. Es más que un juego: es un desaño insolente. Corresponde al espíritu de esta revista.



DIRECTOR:
CÉSAR HILDEBRANDT
EDICIÓN GENERAL: REBECA DÍZ REY

LOS ARTÍCULOS CON FIRMA SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORES.
REDACCIÓN: AMÉRICO ZAMBRANO, ELOY MARCHÁN, RICARDO VELAZCO, ALONSO ZAMBRANO, JULIO ROSPIGLIOSI, BRUNO AMORETTI, SHANNA TACO, ELIA Y. DÍZ
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: PAUL GIBSON VARILLAS **FOTOGRAFÍA:** JOEL DURÁN, CÉSAR ZAMALLOA **CORRECCIÓN:** MARÍA JIMÉNEZ **PENDEGRAMA:** LAURA YEPEZ
REDES SOCIALES: PIA HILDEBRANDT **COORDINACIÓN:** VALERIA VICENTE **COLABORADORES:** JUAN MANUEL ROBLES, RONALD GAMARRA, RODRIGO NUÑEZ CARVALLO, RODOLFO SANCHEZ-AIZCORRE, ORLANDO MAZEYRA GUILLÉN, SONIA SUYÓN, DANIEL ESPINOSA, PEDRO CASUSOL **REDACCIÓN:** JR. INDEPENDENCIA 208 OF. 402 MIRAFLORES.
TÉLEF: (01) 693-1082 **CONTACTENOS:** denuncias@hildebrandtensustrece.com - prensa@hildebrandtensustrece.com - www.facebook.com/semanariohildebrandtensustrece -
TWITTER: @ensustrece. IMPRESO EN LOS TALLERES DEL GRUPO LA REPÚBLICA. HECHO EL DEPÓSITO LEGAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ: N° 2010-05328 EDITADO EN LIMA AGOSTO 2024